



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS:

**“VULNERACIÓN A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA A TRAVÉS
DEL REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LA ANULACIÓN DEL LAUDO
EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO”**

PRESENTADO POR:

BACH. CALLE YAFAC, Aranxta Geraldine

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR:

DR. RIVERA PAREDES, Juan Manuel

LAMBAYEQUE, 2019

**Tesis denominada “VULNERACIÓN A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA A TRAVÉS DEL REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LA ANULACIÓN DEL LAUDO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”,
presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por:**

.....

Aranxta Geraldine Calle Yafac

BACHILLER

.....

Mg. Juan Manuel Rivera Paredes

ASESOR

APROBADO POR:

.....

Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez
PRESIDENTE

.....

Dr. Carlo Manuel Antenor Cevallos
de Barrechea
SECRETARIO

.....

Dr. Juan de la Cruz Ríos
VOCAL

DEDICATORIA

A mis padres María y José, quienes siempre me brindan su apoyo incondicional para el logro de mis metas y a mi hijo Bruno Joaquín; quien me motiva a ser mejor cada día.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por bendecir mi vida en cada momento y a Raúl por impulsarme a ser mejor profesional cada día.

INDICE

INDICE	iii
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	10
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	10
1.1.1. Planteamiento del problema.....	10
1.1.2. Formulación del problema.....	11
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	11
1.2.1. Justificación del estudio.....	11
1.2.2. Importancia del estudio.....	13
1.3. OBJETIVOS.....	14
1.3.1. Objetivo General.....	14
1.3.2. Objetivos Específicos.....	14
1.4. HIPÓTESIS.....	14
1.5. VARIABLES.....	15
1.5.1. Variable independiente.....	15
1.5.2. Variable dependiente.....	15
1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	15
1.6.1. Métodos.....	15
1.6.2. Técnicas.....	16
1.6.3. Instrumentos.....	17
1.7. Análisis estadísticos de los datos	18
1.7.1. Presentación de Datos.....	18
1.7.2. Procesamiento de Datos.....	18
CAPITULO II	20
LA GARANTÍA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.....	20
2.1. EVOLUCION DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA	20
2.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.....	28

2.2.1 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL.....	31
2.2.2 DIFERENCIA ENTRE TUTELA JURIDICA Y TUTELA JURISDICCIONAL	33
CAPITULO III.....	41
LA ESTRUCTURA Y LÍMITES JURISDICCIONALES DE LOS PROCESOS ARBITRALES.	41
3.1 DEFINICION DE ARBITRAJE	41
3.2 NATURALEZA DEL ARBITRAJE	43
3.2.1 Teoría Contractualista o Privatista.	43
3.2.2 Teoría Jurisdiccionalista o Publicista.....	45
3.2.3 Teoría Mixta.	47
3.3 Principio de Autonomía del Arbitraje y el Principio De “Kompetenz Kompetenz”.....	48
3.4 RECURSO DE ANULACION.....	52
3.5 ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO	57
3.5.1 Garantía para interponer el recurso de anulación.....	63
3.5.6 Exposición de motivos de la modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	67
CAPITULO IV.....	70
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	70
4.1. Análisis de los resultados:.....	70
4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional.....	70
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.....	75
CAPITULO V	88
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS	88
5.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva”	88
5.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la configuración procesal para la anulación de los laudos arbitrales”	90
5.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los efectos que produce la incorporación de la carta fianza mediante la modificación en el Art. 45. Inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1341”	92
5.4. Resultado de Validación de Variables	94
5.4.1. Respecto a la variable independiente: La derogación de la incorporación de la carta fianza generada por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado.	94
5.4.2 Respecto a la variable dependiente: La garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales.	95

5.5. Contrastación de Hipótesis.	95
CONCLUSIONES:	97
RECOMENDACIONES	99
Bibliografía	100
Anexos	104

RESUMEN

El Decreto Legislativo N°1341 modificó en el año 2017 la Ley de Contrataciones con el Estado, dicha modificación es objeto de la presente investigación que específicamente se centra en el artículo 45° inciso 8 el cual se refiere a un requisito para la admisibilidad del recurso de anulación en las contrataciones con el Estado.

El presente trabajo de investigación pretende plantear y sustentar la derogación de la modificación a la Ley de Contrataciones a través del D.L 1341, toda vez que atenta contra el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, y como se ha demostrado a través de la investigación a otros derechos fundamentales. De este modo se facilitaría la interposición del recurso de anulación.

ABSTRACT

Legislative Decree No. 1341 modified the Contracting Law in 2017 with the State, this modification is the subject of the present investigation, which specifically focuses on Article 45, subsection 8, which refers to a requirement for the admissibility of the annulment remedy in contracting with the State. This research work aims to raise and support the repeal of the amendment to the Law on Procurement through DL 1341, since it violates the fundamental right to effective judicial protection, and as demonstrated through the investigation to other fundamental rights. This would facilitate the filing of the appeal for annulment.

INTRODUCCIÓN

El arbitraje como medio alternativo y privado de resolución de conflictos tiene como característica principal el acuerdo de voluntades al que deciden someterse las partes por medio del convenio arbitral; la decisión que emita el árbitro o árbitros según sea el caso, puede ser sometida a revisión por el Poder Judicial con la finalidad de conocer si durante el proceso se suscitó algún vicio que acarree la nulidad del mismo.

Este control si bien está supeditado a cuestiones de forma, del mismo modo resulta ser una garantía para la defensa de derechos constitucionales que puedan vulnerarse. Ahora bien, el recurso de anulación en la Ley de Contrataciones con el Estado ha sido modificado y se ha agregado un requisito para su interposición; por tanto, para la presente investigación se hizo la siguiente interrogante como formulación del problema: ¿Cuál es el efecto de la incorporación de la carta fianza generado por la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado, sobre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales?

Como respuesta superficial para darle una posible solución al problema planteado se planteó la siguiente hipótesis: Si se deroga el requisito de la carta fianza incorporado por la modificación en el Decreto Legislativo N° 1341; entonces, se asegurará la garantía de a tutela judicial efectiva en los procesos arbitrales.

Dicha afirmación requerirá ser contrastada, por tanto, se dividió en dos variables, las mismas que originan los objetivos específicos, que ayudarán a deslindar la finalidad de la presente investigación.

Siendo así, en el Capítulo I, se encuentran todos los aspectos metodológicos que coadyuvaron al desarrollo del presente trabajo, comprendiendo la formulación del problema, su justificación e importancia, así como los objetivos, hipótesis y variables. De mismo modo contiene los métodos técnicas e instrumentos que sirven para la recolección de datos.

En el Capítulo II, se describió a la Tutela Jurisdiccional Efectiva como una garantía de acceso a los tribunales, indicando su evolución, naturaleza y el alcance del mencionado derecho constitucional; todo ello con la finalidad de indicar la vulneración que existe a este derecho como consecuencia de la incorporación del requisito de la carta fianza.

En el capítulo III, en primer lugar, se hace una descripción del arbitraje; posteriormente se hace lo mismo con el recurso de anulación en las Contrataciones con el Estado, indicando cuál es la condición para la interposición del mismo y finalmente se cita la exposición de motivos del D.L. N° 1341°.

En el Capítulo IV, se plasma el análisis y resultados del trabajo de investigación vista desde un enfoque jurisdiccional el cual se da por la evaluación del criterio técnico jurídico de sentencias de vista sobre recurso de anulación de laudo arbitral de las salas civiles en el Distrito Judicial de Lambayeque y el segundo enfoque de la opinión de los operadores jurídicos, resultados que afianzan la propuesta del presente trabajo.

En el capítulo V se realiza la discusión sobre los objetivos específicos y validación de las variables con la finalidad de contrastar la hipótesis inicial y la conclusiva llegando a comprobarse la hipótesis inicial positivamente por lo que se concluye que con la derogación del requisito incorporado a través del D.L. N° 1341°, se podrá interponer sin ningún obstáculo el recurso de anulación y por tanto no se vulnerará el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva.

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1.1. Planteamiento del problema.

La presente investigación tomó su iniciativa con la modificación a la Ley de Contrataciones del Estado a través del D.S. N° 1341-2017-MEF, específicamente en el artículo 45. Inciso 8 que en su segundo párrafo señala la obligatoriedad de ofrecer una garantía para interponer el recurso de anulación, el cual no sería el único caso en el que la ley exige el mencionado requisito, el D.L. N° 1071-2008-MEF (Ley de Arbitraje) en su artículo 66.1 señala que la presentación del recurso de anulación del laudo arbitral no suspende la ejecución del mismo, solo lo haría si se presenta una garantía acordada por las partes.

Respecto a la situación descrita hemos dado cuenta del imposible de muchos contratistas en cumplir con los montos que se exige en dichas cartas fianzas y el motivo por el cual se requiere la constante presentación de garantías en materia de contrataciones con el Estado; esto es, en caso la pretensión sea cuantificable económicamente el 25% de del valor de la suma que ordene pagar el laudo y en el supuesto se trate de una pretensión no valorizable en dinero sería del 3% del monto del contrato original; generando con ello un obstáculo a la interposición de

los recursos de anulación a laudos arbitrales, constituyendo una clara vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

La posible solución que se propone al problema planteado es la derogación del artículo 45 inciso 8 del D.L N°1341-2017-MEF; con lo cual se lograría que los contratistas que consideren el derecho no les asiste puedan interponer recurso de anulación del laudo arbitral siempre que se adecuen a los supuestos que exige la norma, sin obligarse a ofrecer carta fianza. Significando dicha derogación que ya no se vulnerará el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, pues todos los contratistas podrán acceder a un juicio ordinario.

1.1.2. Formulación del problema.

¿Cuál es el efecto de la incorporación de la carta fianza generado por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado, sobre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

1.2.1. Justificación del estudio.

El hecho de conceder la garantía de carta fianza para interponer el recurso de anulación de laudo arbitral se constituye en un impedimento para el contratista; pues no siempre

puede disponer del monto que manda la ley aportar delimitando a los particulares su derecho a discutir ante sede judicial la validez de los laudos arbitrales; siendo esta la razón que justifica el estudio proyectado.

Así se ubicó en el aspecto legislativo parte de esta justificación, pues lo más probable es que la intención del legislador haya sido impedir que se interponga dicho recurso como una última instancia a la que todo abogado defensor debía necesariamente recurrir como última alternativa de solución a su controversia; pese a que se acude a dicha sede únicamente a dilucidar la validez del laudo por las causales que desarrolla la Ley General de Arbitraje puesto que se tiene prohibido resolver sobre el fondo de la controversia, convirtiendo a la sede arbitral en una “vía administrativa” que hay que agotar para luego acudir a la vía jurisdiccional; sin embargo lejos de lograr lo propuesto se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no solo por el monto que obligatoriamente se debe cumplir y el cual ya es en sí un obstáculo, sino que además dicha condición resulta ser únicamente aplicable al contratista.

La tutela judicial efectiva como lo ha manifestado anteriormente el Tribunal Constitucional en muchas de sus sentencias, es un atributo que comprende una serie de derechos como el derecho de acceder a sede jurisdiccional y a la eficiencia de las resoluciones judiciales. Ambas partes deben gozar de igualdad de oportunidades para hacer valer sus pretensiones y sean eficaces concretizándose en la realidad.

1.2.2. Importancia del estudio.

La presente investigación es importante porque a través del análisis teórico y jurisprudencial que he realizado, se puede lograr que los contratistas interpongan el recurso de anulación del laudo arbitral sin la presentación previa de una garantía (carta fianza) y acceder a la justicia ordinaria a fin de cuestionar la validez del laudo arbitral que incumple las condiciones mínimas requeridas para su validez y custodiar el respeto de los derechos fundamentales.

Asimismo, a través de esta investigación se profundizará el estudio respecto al arbitraje en materia de contrataciones con el estado, del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, los cuales serán citadas posteriormente; logrando así aportar conocimiento de relevancia en el ámbito jurídico.

Del mismo modo el presente trabajo es de suma relevancia legislativa y social pues ayuda a deslindar los problemas que suponen la aplicación de la normativa y llegar a las conclusiones que susciten un cambio legislativo en aras de lograr que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados y se encuentren en igualdad de condiciones con todos los entes del estado.

1.3. OBJETIVOS.

1.3.1. Objetivo General.

Determinar el efecto de la incorporación de la carta fianza generado por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado, sobre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales.

1.3.2. Objetivos Específicos.

- Desarrollar doctrinariamente la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva.
- Estudiar la configuración procesal para la anulación de laudos arbitrales.
- Analizar los efectos que produce la incorporación de la carta fianza mediante la modificación en el Art. 45. Inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1341.

1.4. HIPÓTESIS.

Si se deroga el requisito de la carta fianza incorporado por la modificación en el Decreto Legislativo N° 1341; entonces, se asegurará la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudo.

1.5. VARIABLES.

1.5.1. Variable independiente.

La derogación de la incorporación de la carta fianza generada por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado.

1.5.2. Variable dependiente.

La garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales.

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.6.1. Métodos

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

- ✓ **Método exegético jurídico.-** Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas; detalle que se confrontara con la realidad regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

- ✓ **Método sistemático jurídico.-** Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

- ✓ **Método hipotético deductivo.-** Al emplear el método hipotético deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

- ✓ **Método inductivo.-** La aplicación de este método nos permitirá analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados.

- ✓ **Análisis Documental.-** Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de

investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Arbitraje, específicamente respecto al tema tratado.

✓ **Observación.-** Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la realidad socio jurídica que engloba la incorporación de la carta fianza para la interposición del recurso de anulación del laudo arbitral en la ciudad de Chiclayo.

✓ **Entrevista.-** Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son árbitros, jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática.

1.6.3. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación.

✓ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utiliza en la técnica de la observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación.

✓ **La Guía de Entrevista.-** Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los entrevistados que son los conocedores del tema.

1.7. Análisis estadísticos de los datos

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información.

1.7.1. Presentación de Datos

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera:

- a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas.
- b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos.
- c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas.

1.7.2. Procesamiento de Datos

- a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros,

serán evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados.

- b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hará teniendo en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente proyecto de investigación.
- c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente.

CAPITULO II

LA GARANTÍA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

2.1. EVOLUCION DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

Como parte importante del desarrollo de esta proyección se ha considerado prudente plasmar una porción del reconocimiento doctrinario que se hace respecto al proceso de arbitraje dando un primer acercamiento a la comprensión de la tutela jurisdiccional efectiva, para lo cual se cita inicialmente a Gonzales Pérez (1984), quien en su libro titulado *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional* señaló:

Los hombres que en su estado primitivo natural no reconocían superior que los defendiesen de insultos, opresiones y violencias, estaban, por consiguiente, autorizados para hacerlo por sí propios; la experiencia les hizo entender los graves daños a que los conducían estos medios, pues no podía defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para conservarse, excitaban turbaciones a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen en la seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y los conservase en paz y en justicia (pág. 19)

Evidentemente la descripción que hace este autor, está referida al aspecto originario de la protección que le asiste a los sujetos y la facultad que tienen de someterse al criterio de un determinado sujeto, entendiéndose a esto último como el inicio de la consagración de

la tutela jurisdiccional efectiva, en base a la voluntad de los sujetos que deciden seguir la guía proporcionada para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos.

Junto con la mencionada voluntad de los sujetos se erige el derecho de acción, que según lo citado por Giovanni Priori Posada en el artículo de revista denominado: *Del Derecho De Acción A La Efectiva Tutela De Los Derechos* quien haciendo referencia a Giovanni Plugiese indica lo siguiente: “La definición de derecho de acción que la doctrina formulaba hasta mediados del siglo XIX partía de la definición de Celso” (págs. 149-161).

Se aprecia que tal definición es tomada del filósofo griego Celso, quien según lo recogido por Aguiar Lozano(2010) en su libro titulado: *Tratado sobre la teoría del enriquecimiento injustificado o sin causa en el derecho civil de las obligaciones*, tiene una frase célebre que da origen al concepto de acción: “hijil aliud est actio quam ius persequendi in iudicio quod sibi debetur (la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe)” (pág. 73).

De la frase que nos dejó Celso podemos darnos cuenta que antiguamente se concebía al derecho de acción como similar o igual al derecho material, es decir que la facultad de acudir a juicio es confundida con la pretensión que se ventilara en el mismo y de esta manera el único resultado que se puede obtener es el que asiste de manera positiva al recurrente.

Habiendo reconocido el origen del término acción desde la perspectiva de la filosofía griega como fuente más remota, se puede apreciar el siguiente paso evolutivo de la concepción del término aludido, así se tiene a Giovanni Priori Posada (2014) en el artículo de revista denominado: *Del Derecho de acción a la efectiva tutela de los Derechos* que señala:

La construcción de la noción de acción que se comienza a dar a fines del siglo XIX se ve fuertemente influenciada por la noción de derecho subjetivo que comienza a surgir en la doctrina europea de esa época. Frente a la influencia de la noción de derecho subjetivo para establecer la categoría jurídica que mejor se adapta para explicar la noción de acción, surge Wach; esgrimiendo su tesis de un derecho a obtener tutela jurídica del Estado.

Dentro de la preocupación de la doctrina de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, se encontraba la necesidad de encuadrar a la acción como un derecho subjetivo, una mera facultad o más bien un poder. (págs. 146-161).

A fin de entender la apreciación conceptual reseñada se ha ubicado la postura exacta de Wach; citada por Carmine Romianello (2012) en su obra denominada *Teoría General del Proceso*: “Wach, quien tomo los fundamentos de Muler, consideró la acción como un derecho autónomo contra el Estado; puesto que se reclamaba la actuación jurisdiccional para obtener la tutela de derecho invocado” (pág. 576). Según Wach el derecho de acción es un derecho autónomo, libre; está supeditado a su reconocimiento por parte del Estado, pues la actuación de los jueces deviene del imperio del mismo, esta concepción de Wach es una apreciación subjetiva del derecho de acción según se desprende del texto citado y

que comenzó a surgir en aquella época, entendiéndose además que bajo la idea de acción de Wach como autónomo se refirió a la independencia de la acción y la pretensión, en contraposición a lo que se pensaba anteriormente generando un equívoco con otras facultades que tienen conceptos afines como pretensión y demanda, claramente la primera referida a la razón material por la que se acude a juicio que antecede a la facultad de solicitud de tutela y la segunda que es la concreción mediante la que se recoge la pretensión y que da inicio al proceso; sin embargo la teoría de Wach aporta una característica significativa al señalar que tal derecho necesitar ser sustentado ante el Estado, lo que para muchos autores significó una confusión entre el derecho procesal y material.

De otro lado, surgen Kohler y Degenkolb, quienes sostuvieron una teoría abstracta y subjetiva, según lo señala Beatriz Quintero Eugenio Prieto (1995), en su libro denominado *Teoría General del Proceso*, puntualizando lo siguiente: “En esta nueva tendencia, la acción se independiza no solamente del derecho sustancial, sino también del resultado del proceso, estructurándose como un derecho abstracto, genérico, universal, siempre el mismo, cualquiera sea la relación sustancial que subyazca en el proceso” (pág. 244). Noción que además tuvo mucha más aceptación pues como se puede apreciar del texto recogido destaca la autonomía del derecho de acción pero haciendo hincapié en que el resultado del proceso puede favorecer a cualquiera de las partes, es decir cualquier persona puede ejercer su derecho de acción pero este puede favorecerle o no; por ello, posteriormente a estas nociones y después de un largo tiempo, se determinó la verdadera esencia del derecho de acción ya que se incluyó en la *Declaración Universal de los*

Derechos Humanos(1948) aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, específicamente se ubica en el artículo 10° que prescribe lo siguiente: “toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos, obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948), determinando entonces su condición de derecho humano, de tal modo se consideró al derecho de acción como una facultad inherente al ser humano, inclinándose a una matiz constitucional, tal como señala Couture (2010) en su libro denominado *Fundamentos del Derecho Procesal Civil* sobre el derecho de acción: “Este poder jurídico compete al individuo como tal, como un atributo de su personalidad” (pág. 49).

El derecho de acción logró su incorporación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consolidándose como un derecho cuya trascendencia se manifiesta en la inherencia al ser humano como atributo de su personalidad, siendo un derecho humano. A través del mencionado derecho se garantiza una tutela efectiva del derecho de acción que repercute positivamente en la sociedad, ya que si se respetan los derechos de los ciudadanos, pero en específico el derecho de acción, la población sentirá que puede obtener justicia, paz y por ende se suscitara el orden en la misma. Sobre esta transición del derecho de acción, Marco Comporti (1980), en su libro denominado *Derechos reales en general, tratado de derecho civil y comercial* señala:

En realidad, el problema del constitucionalismo de los días actuales no es más el de reivindicar una posición formal de autonomía del ciudadano en

sus relaciones con el poder estatal, tal como era exigido por la concepción de Estado liberal, ni incrementar sólo la igualdad formal. Se trata ahora de asegurar al ciudadano la posibilidad de defender en concreto tales posiciones delante del poder público, en busca de una igualdad material, en consonancia con la idea fuerza del “welfare state” (pág. 16).

Se puede notar que el autor señaló un cambio de opinión jurídica la cual se identifica como la transición antes explicada, apreciándose además que fundamenta la posición que se presume es la correcta en el ideal denominado Welfare state, lo cual se refiere según lo encontrado de Bernardo Pena Trapero(2009), en el artículo de revista denominado *La medición del bienestar social: una revisión crítica*, donde lo explica de la siguiente manera:

(...) De hecho, el mismo término de Estado de Bienestar (welfare state) ha sido creado por William Temple, Arzobispo de Canterbury, como contraposición al estado de guerra (Warfare state) de la Alemania nazi. Las políticas del estado del bienestar dejan, sin embargo, un amplio campo de necesidades no cubiertas, que hace que el Bienestar Social no dependa exclusivamente de los niveles económicos de los individuos o de la sociedad en su conjunto, ni de las ayudas que los gobiernos puedan prestar para cubrir las necesidades básicas, ayudas que por otra parte, son muy desiguales según países (págs. 299-324)

Según indicó el autor citado, se trata de defender posiciones delante del poder público, haciendo mención a la afinidad con la idea de Estado de Bienestar, que evidentemente dicha noción nacía en contraposición a un estado de guerra y que tal como lo señala Bernardo Pena Trapero buscaba la independencia de las personas del poder estatal y ceñir

una igualdad entre ambos, por tanto se estableció un concepto del derecho de acción que no necesita ser reconocido ya que es inherente al ser humano, tiene calidad de derecho fundamental y es un atributo del hombre, que ayuda a mejorar sus relaciones en la comunidad con una tutela que va más allá de lo formal al ser parte de la dignidad de la persona.

Evidentemente se observó el cambio señalado como una suerte de transición del concepto proteccionista que inspira el derecho de acción como antecedente de la tutela jurisdiccional efectiva, siendo importante retomar la idea de Comporti (1980) quien refuerza lo dicho indicando lo siguiente: “El derecho no puede ser concebido sólo como un sistema de imperativos dispuestos por la voluntad del Estado en defensa de las esferas de libertad del individuo” (pág. 16). Ahora bien más que una transición del derecho de acción, se trata de una evolución de conceptos, de ideas que poco a poco van empoderando al ser humano en sus derechos para que el Estado no actúe arbitrariamente, puesto de que por sí, este está dotado de poder que el mismo pueblo le otorga.

En merito a ello Comporti señalaba que ya no solo se trata de la autonomía del derecho de acción ni de la igualdad formal, entendida esta como la igualdad que nos atañe a todos ante la ley sino que además se trata ahora de hacer valer nuestro derecho frente al Estado y de llevarlo a una igualdad material, es decir ya no solo se trata de que el estado dicte normas que sean aplicables a todos por igual sino que además deberá proteger la situación concreta de cada ciudadano, deduciéndose por esto que en una sociedad siempre existirá desigualdad entre ellos como por ejemplo en el aspecto económico, siendo así el Estado

deberá amparar cada situación en específico de cada ciudadano, tratando de este modo de lograr una igualdad entre aquellos.

Como se ha señalado entonces se ha manifestado al derecho de acción en tres momentos el primero de ellos, se suscita cuando no se hacía una distinción entre el derecho de acción y el derecho material, en un segundo momento resulta ser lo contrario diferenciándose ambos conceptos y por ultimo un tercer tiempo en el que además de la autonomía del derecho de acción se sostiene que no siempre el derecho le asiste a quien acciona la titularidad de su derecho; es en este orden de ideas en el que se le dio un trato diferente al derecho de accionar de las personas, surgiendo la idea de la “tutela jurisdiccional efectiva” como un concepto mucho más completo en que ya no solo se habla de una visión subjetiva, autónoma y abstracta sino que además surge el referido derecho como un derecho humano asimilándolo como un atributo de la persona en aras de lograr la igualdad, el respeto en una comunidad pero dejando a salvo claro el concepto de acción, tal concepto ha sido trasladado como un derecho constitucional incorporándose en la Carta Magna. Al respecto se encuentra el concepto indicado por Carlos Alberto Olivera de Oliveira (2009) en su libro denominado *El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la perspectiva de los derechos fundamentales* que manifiesta: “Con la constitucionalización de tutela jurisdiccional de los derechos, el eslabón entre el derecho material y el procesal se da por medio del derecho fundamental constitucional de tutela, utilizando como herramienta el otorgamiento de jurisdicción y la respectiva pretensión” (págs. 185-201). A través del tiempo se ha buscado constantemente la diferenciación de los conceptos de derecho de acción y el derecho material, consiguiendo con esta

incansable búsqueda una verdadera distinción entre ellos y junto a ello emergiendo el derecho procesal, lo que Carlos Olivera dice es que una vez surgido el derecho a la tutela jurisdiccional de los derechos, es precisamente este concepto de tutela, que surge como la necesidad de amparar un derecho, lo que hace que el titular de su pretensión(derecho material) acuda al proceso(derecho procesal) con la finalidad de obtener justicia, es por ello que la tutela une a ambos derechos en opinión del autor citado.

Por tanto se puede concluir que a través del concepto de derecho de acción se va dando origen al concepto de tutela jurisdiccional efectiva pero no se habla de esta sino hasta que se constitucionaliza y se caracteriza como un derecho humano, delimitando así una marcada diferencia entre derecho material y procesal; puesto que es a través de la tutela, mediante la cual se unen estos dos derechos; es decir junto con la pretensión que surge de determinado sujeto nace la necesidad de accionar con la finalidad de amparar sus derechos mediante la vía procesal correcta y para que se efectivicen los mismos durante todo el proceso y después de este.

2.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

Gonzales Pérez (1984), en el libro denominado *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional* sobre el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva señaló lo siguiente: “Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas” (pág. 27). En esta definición que hace Gonzales Pérez sobre el derecho a la

tutela jurisdiccional efectiva pone énfasis en sostener que mediante este derecho se trata de conseguir el amparo de una determinada pretensión, además menciona que dicha solicitud se dirigirá al órgano jurisdiccional, pero que no basta con que sea atendida sino que además debe haber atravesado un proceso justo y donde se cumplan todos los derechos que son parte de la tutela jurisdiccional efectiva tal como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N° 00015-2005-AI/TC del 05/01/2006:

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (pág. 16)

Como se pudo apreciar el Tribunal Constitucional señaló que para un cabal cumplimiento de la tutela jurisdiccional efectiva deben cumplirse ciertas garantías y estas se manifiestan desde que se decide acudir al proceso; esto es, cuando cualquier persona puede hacer valer su pretensión material en un proceso convirtiéndola en una pretensión procesal, desarrollándose lejos de algún impedimento, en un tiempo razonable y finalmente llegar a obtener una decisión justa, en la que se ejecute lo señalado en la resolución judicial.

Del mismo modo el Tribunal Constitucional en la demanda de amparo del Expediente N° 763-2005, hizo una definición del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva indicando:

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión

formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido (pág. 3).

Reiteró el Tribunal Constitucional en su definición la importancia de que cualquier persona pueda acudir a solicitar al órgano jurisdiccional el amparo de su solicitud en cualquier tipo de proceso que considere adecuado a su pretensión, señalando además que de ningún modo esto quiere decir que con tan solo pedir la tutela de su pretensión se asegura un resultado positivo, sino que está referido a que el acceso a los órganos jurisdiccionales es una facultad de la que pueden hacer uso todos los ciudadanos indistintamente de si posee la legitimidad o no para obrar en el proceso, por lo que se deduce que el Tribunal Constitucional sostiene que es a través del proceso en el que se dilucidará la legitimidad del derecho, resalta además que en un sentido extensivo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es el juez dentro del proceso quien podrá recién revisar el fondo de la controversia haciendo una correcta merituación del caso, la decisión que emita deberá ser cumplida en su totalidad y con esto se refiere al concepto de eficacia que será explicada más adelante.

Cabe mencionar al Dr. Cesar Landa Arroyo (2012) en su libro denominado *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia* sobre el tema tratado indicó:

Se trata de un derecho genérico o complejo que se descompone en otros diversos derechos enumerados dentro de él, y algunos otros implícitos, entre los cuales destacan el derecho de toda persona de promover la

actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad de las resoluciones (pág. 90)

En opinión del Dr. Cesar Landa Arroyo la tutela jurisdiccional efectiva se trata de un derecho que está constituido por otros, resaltando la importancia de dos de ellos, en primer lugar, la libertad para acceder a los órganos jurisdiccionales y en segundo lugar el cumplimiento de la decisión de los jueces con lo que se lograría la efectividad de las resoluciones.

2.2.1 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL

Del libro de Chamorro Bernal (1994) llamado *La Tutela Jurisdiccional Efectiva* sobre la efectividad de la tutela jurisdiccional se ha podido obtener la siguiente información para el presente trabajo:

(...) Efectividad quiere decir que el ciudadano tenga acceso real y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse real y no retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello. Efectividad quiere decir que la persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, efectividad quiere decir que no se hurte al ciudadano una resolución al amparo de formalismos exagerados; efectividad quiere decir que la resolución decida realmente el problema planteado (...) (pág. 276)

La definición es muy clara, el Estado es quien debe velar para que un proceso sea efectivo, y lograr resolver la pretensión que se ha interpuesto ante los órganos jurisdiccionales pero sobre todo sin obstaculizar el amparo de los derechos de los ciudadanos, que exista

efectividad desde que se decide acudir a un proceso, por lo que debe existir la vía idónea para la pretensión específica de cada persona y una vez acogida la solicitud ambas partes sean citadas para ejercer su derecho de defensa correspondiente, de manera que se susciten tiempos razonables que se cumplan en forma oportuna y acorde a lo que señala la norma, sin dilaciones y finalmente con la expedición de una sentencia que ampare la pretensión materia de conflicto y que además se ejecute, ya sea dicha sentencia declarativa, constitutiva o de condena.

Asimismo cabe mencionar a Giovanni Priori Posada en el artículo de revista denominado: *Del derecho de acción a la efectiva tutela de los derechos* quien haciendo referencia a Chamorro Bernal indicó que existen cuatro grados de efectividad:

- a) La efectividad de primer grado garantiza a los ciudadanos la obtención de una respuesta del órgano jurisdiccional. Queda claro entonces que la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el mero acceso y en el proceso debido; sino que se requiere además una respuesta del órgano jurisdiccional.
- b) La efectividad de segundo grado garantiza que la resolución del órgano jurisdiccional será una que resuelva el problema planteado. Sin embargo, esto no quiere decir que este derecho garantice a los ciudadanos un tipo especial de respuesta jurisdiccional, sino sólo que se resuelva el problema planteado independientemente de la respuesta que se dé, siempre que, claro está, dicha solución sea razonable y esté en armonía con el ordenamiento jurídico.

c) La efectividad de tercer grado garantiza que la solución al problema planteado sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico.

d) La efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional será ejecutada. (págs. 273-292)

Como se pudo apreciar de lo citado anteriormente la efectividad no solo está referida a asegurar el acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales, sino que además debe sostenerse durante todo el proceso con garantías mínimas que se respeten, esta primera porción funge de un requisito previo para alcanzar la efectividad.

Se entiende entonces que tal consecuencia dependerá además de otros factores como son el hecho de una atención adecuada al requerimiento, entiéndase como el debido proceso, lo cual se presume ha de conducir a la solución al problema acontecido, la misma que estará contenida en una resolución conforme a derecho que se cumpla, entiéndase esto último como la ejecutabilidad de la decisión, para lo cual el Estado debe proveer los medios necesarios.

2.2.2 DIFERENCIA ENTRE TUTELA JURIDICA Y TUTELA JURISDICCIONAL

Generalmente en la práctica procesal se advierten cierto tipo de confusiones en el uso de los términos que en este acápite se desarrolla, ello en el sentido de que para la orientación de la propuesta que surgirá de esta investigación, se hace necesaria la diferenciación a fin de que en efecto que surta cualquier modificación se haga práctico en el rubro adecuado

de protección entonces la diferenciación permitirá establecer cuál es el ámbito de acción de las garantías que ofrece.

Para entender el alcance de la terminología se cita a Antonio José Valencia Mirón (2000) en su libro titulado *Introducción al Derecho Procesal* que explica:

La tutela jurídica que concede la norma sustancial consiste en el reconocimiento de derechos, con su haz de facultades y deberes correlativos, atribuyéndoles la protección jurídica necesaria para que se pueda afirmar que son derechos, mientras que la tutela jurisdiccional hace referencia a la función estatal desempeñada por Jueces y Tribunales cuyo cometido es actuar el derecho objetivo, aplicando, en su caso, las sanciones expresas o implícitamente establecidas en éste para el caso de la violación de la norma jurídica. (pág. 350)

De acuerdo a lo expuesto por Valencia Mirón la tutela jurídica se refiere al amparo que otorga el Estado a los derechos de los ciudadanos a través de la norma, debido a que son reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico y por tanto asegura que no existan futuras vulneraciones a los mismos; lo que bien podría entenderse como aquella herramienta jurídica de la cual se sirve el Derecho para establecer el control procesal de la solución de controversias la cual se puede calificar en función a su eficacia.

En segundo lugar, sobre la tutela jurisdiccional refirió que se trata de la aplicación de la norma que se ejerce mediante una función que es delegada a los jueces. En ese sentido la calificación que se haga respecto a esta función sólo será desde la perspectiva de la

eficiencia, orientada a la verificación de los criterios que se adopten argumentar y motivar sus decisiones.

2.2.3 TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

Una vez comprendido el contenido de la tutela jurídica y el aspecto específico dentro de ella que interesa para el desarrollo de esta investigación, entiéndase a la tutela jurisdiccional efectiva, corresponde describir la relación que tiene con el pilar o guía que permite el desarrollo adecuado de un proceso jurídico, esto es el debido proceso.

Sobre la relación entre debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva se han extendido diversas posiciones de muchos juristas, por esta razón se ha creído conveniente extraer algunas de ellas:

En primer lugar se recogió la opinión de Juan Monroy Gálvez (2007) quien en su obra denominada *Teoría General del Proceso* señala sobre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso lo siguiente:

Entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a un debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta del primero, es su actuación (págs. 459-460).

Al respecto, indicó Monroy Gálvez que la tutela jurisdiccional es como si se tratara de la

anatomía, y el debido proceso la fisiología, previo a lo que debe establecerse la relación entre los términos de la analogía, así, la anatomía se ocupa de la descripción del cuerpo, mientras que la fisiología se encarga de la ubicación de cada una de las funciones que se puede ejecutar con determinadas porciones de tal anatomía.

Deduciéndose que el debido proceso para el autor es el diseño de la línea de funcionamiento de la tutela jurisdiccional, de tal modo que la una se sirve de la otra pues la tutela jurisdiccional es un derecho que encamina el acceso a la justicia, y se mantiene hasta la ejecución de la decisión judicial, mientras que el debido proceso regula, norma todo el proceso que ampara la tutela jurisdiccional efectiva; pues no son conceptos aislados sino que por lo contrario están relacionados entre sí siendo el debido proceso una manifestación de la tutela jurisdiccional.

De otro lado se tiene a Marcial Rubio Correa (1999) en su libro denominado *Estudio de la Constitución Política de 1993* que sobre la relación entre debido proceso y tutela jurisdiccional manifestó lo siguiente: “De manera que lo más razonable en vista de la cercanía de los dos conceptos es decir que debido proceso y tutela jurisdiccional parecen ser en sustancia el mismo cuerpo de derechos que tiene dos nombres distintos” (pág. 65); para este autor ambos conceptos serían lo mismo, pues para él la única diferencia radica en los orígenes de cada término, y es debido a ello que el mismo concepto tuvo dos nombres distintos pero cuyo significado es el mismo.

Finalmente cabe destacar la opinión de Víctor Obando Blanco (2011), en su libro

denominado *El Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva* sobre el concepto de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso manifiesta:

(...) el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho público y subjetivo por el que toda persona, por el solo hecho de serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultado a exigirle al Estado tutela jurídica plena, y cuyo contenido básico comprende un “complejo de derechos”: derecho de acceso a la justicia, derecho al debido proceso, derecho a una resolución fundada en derecho y derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (pág. 152).

Se rescata de la definición que nos proporciona el autor Víctor Obando Blanco que se refiere a la tutela jurisdiccional efectiva como un complejo de derechos que acoge al derecho al debido al proceso como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, como si se tratara de una relación de género y especie; pues bien, esta postura no resulta ser la más correcta ya que el debido proceso no es parte de la tutela jurisdiccional efectiva debido a que regula el acceso a la justicia mediante requisitos que necesariamente deben cumplirse y se mantiene durante todo el proceso hasta el efectivo cumplimiento de la resolución judicial, por lo tanto ambas coexisten con el mismo rango e importancia; explicándose la postura del autor citado no como un seccionamiento que absorbe ciertos derechos que al incorporarlos permiten alcanzar eficacia, más no se refiere a una subordinación.

En base a lo descrito se entiende una figura de coexistencia que marca la relación entre tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso en nuestro ordenamiento jurídico, la misma que esta prescrita en las siguientes normas:

- i. En la Constitución Política del Perú, artículo 139, inc. 3º: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
- ii. Art. I del Título Preliminar del Código Procesal Civil que prescribe: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.
- iii. Art. 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prescribe: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso”.

2.2.4 LA EFICACIA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

Giovanni Priori Posada (2003) en el artículo de Revista denominado *La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las Situaciones Jurídicas Materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso* expuso: “De esta manera, un diseño de tutela jurisdiccional inadecuado provocaría la insatisfacción del derecho material, es decir, su vulneración. En otras palabras una tutela jurisdiccional no efectiva provoca la ineficacia de la situación jurídica sustancial” (págs. 273-292); describe Priori Posada una situación en la cual no se da el cumplimiento de la efectividad de la tutela jurisdiccional, lo que supone una inasistencia por parte de los órganos jurisdiccionales a la solicitud de los recurrentes, generando la imposibilidad de que la pretensión de las partes sea satisfecha, en pocas palabras genera la ineficacia de la tutela jurisdiccional.

Del mismo modo en la tesis del MG. Genaro Nelson Lozano Alvarado (2008) para obtener el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, titulada *Factores que Afectan la Eficacia del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva en Materia Civil* sobre el tema tratado se indicó:

Con independencia de cuál sea el contenido, alcance y significado del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la experiencia jurídica en nuestros días y en diversas realidades, nos muestra una diversidad de factores que atentan contra la eficacia de este derecho (pág. 25)

De este modo, Nelson Alvarado señaló ciertos factores que atentan contra la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva como por ejemplo las cargas procesales, la lentitud de los procesos, el exceso de formalismos, entre otros; que según él generan obstáculos para el acceso a la justicia o posteriormente para el desarrollo de un proceso, motivo por el cual no se obtendrá un correcto amparo de los derechos de las personas y por ende se convertirá en un proceso ineficaz ya que su resultado no será el esperado por las partes.

De lo analizado se puede concluir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene su origen en el derecho de acción, como se ha podido ver en lo reseñado anteriormente este pasó por varias etapas y recién se habla de tutela jurisdiccional efectiva cuando se logra su constitucionalización y se denota tal derecho como un derecho humano; por ende se puede decir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva logra que los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales luego de agotar todas las vías para hacer

valer su pretensión material y resolver en última instancia su problema, del mismo modo permite un correcto desenvolvimiento del proceso judicial normado por un debido proceso que actúa como una especie de filtro a la tutela jurisdiccional y que además resulta ser una manifestación de la misma, encaminadas ambas a lograr la efectiva tutela jurisdiccional, lo que quiere decir que el proceso deberá no solo culminar con una resolución judicial sino que además lo decidido sea efectivamente cumplido, y por ende la pretensión de las partes sea satisfecha alcanzando todos los presupuestos expuestos anteriormente, con lo que llegaríamos a decir que un proceso es eficaz.

De todo lo desarrollado en el párrafo anterior acerca de la estructura de la tutela jurisdiccional efectiva se puede decir que se trata de una garantía y por tanto no puede ser vulnerada, pues a través de aquel se asegura el derecho de los ciudadanos a acudir a un proceso judicial con las garantías mínimas que se requieren para su desarrollo y ejecución, creemos pues que el amparo que otorga este derecho no puede estar condicionada a factores económicos o de otro tipo ya que esto se constituiría en un límite al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

CAPITULO III

LA ESTRUCTURA Y LÍMITES JURISDICCIONALES DE LOS PROCESOS ARBITRALES.

3.1 DEFINICION DE ARBITRAJE

En opinión de Vidal Ramírez (2003) “el arbitraje viene del latín arbitrale que a su vez proviene de la voz arbitel que significa: el que asume el papel de juez entre las partes” (pág. 21), manifestando con esto el rol que desempeñan ciertas personas que no son jueces pero que actúan como si lo fueran, pues ambos deben resolver distintas controversias que surgen entre las personas, es decir Vidal Ramírez realiza una semejanza entre los papeles que desempeñan árbitros y jueces.

Sobre la definición de arbitraje se recoge lo señalado por Lohmann Luca de Tena (1988) en su libro denominado *El Arbitraje. Para Leer el Código Civil*, afirmó que:

Es el arbitraje la institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual uno o más partes deciden someter a uno o más terceros que aceptan el encargo, la resolución de un conflicto de derecho privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de disposición, obligándose a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades (pág. 41)

Describió Lohmann que el sometimiento al arbitraje es un acuerdo de voluntades entre

ambas partes, quienes manifiestan que, de surgir algún tipo de controversia en su relación jurídica, pueden acudir a uno o más árbitros a fin de resolver su problema. Siendo que además se comprometen a llevar a cabo todo el proceso arbitral hasta la expedición del fallo arbitral lo que actualmente se contiene en el llamado laudo; una vez expedido recién puede cualquiera de las partes interesadas acudir a un proceso ordinario; precisamente este aspecto es el que interesa a la investigación puesto que sobre una de las formas de acceder a la vía judicial es el recurso de anulación, cuyos requisitos previos son los que se cuestionan.

En sentido similar Cantuarias Salaverri y Aramburú Yzaga (1994) en el libro llamado *El arbitraje en el Perú: Desarrollo actual y perspectivas futuras* indicó sobre el arbitraje: “es un medio privado de solución de controversias, mediante la intervención y decisión de terceros también privados, a quienes las partes de manera voluntaria han decidido someter su conflicto, aceptando de antemano acatar su decisión” (pág. 39); los autores tenían una opinión parecida a la de Lohmann, resaltando la manifestación de voluntad de las partes para acudir a un proceso arbitral, sin embargo hacen hincapié en que ambas partes deben acatar la decisión emitida en el laudo; al parecer la definición creada resulta un tanto incompleta puesto que en el caso de que alguna de las partes no se encuentre conforme con tal decisión, se le prohíba acudir a un proceso judicial.

Del mismo modo, Giuseppe Vera Cacho (2013) en el artículo de revista llamado *Consideraciones Generales Acerca del Arbitraje* señaló:

El arbitraje es una institución que forma parte de los medios alternativos de resolución de conflictos y, como tal, una opción frente a la justicia

estatal o jurisdicción impartida por el Poder Judicial. Tiene el carácter de vinculante u obligatorio para aquellos que han participado de él (págs. 15-38).

El autor citado indicó que el arbitraje resulta ser una alternativa para resolver una controversia, ya que no es necesario acudir a un proceso judicial, si las partes no lo requieren; por otro lado indicó que la decisión que toman los árbitros es vinculante u obligatorio para las partes, deslindando con ello uno de los caracteres del laudo arbitral, lo cual significa que la decisión que emiten los árbitros debe ser cumplida en la forma y plazos establecidos.

3.2 NATURALEZA DEL ARBITRAJE

Se ha discutido mucho acerca de la naturaleza del arbitraje, hemos recogido ciertas teorías para un mayor entendimiento del tema.

3.2.1 Teoría Contractualista o Privatista.

Sobre la teoría Contractualista, Alvaro Salcedo Flores (2010) en el artículo de revista denominado *En Torno a la Naturaleza Jurídica del Arbitraje* señaló lo siguiente:

(...) el arbitraje es una institución del derecho privado, regido por la voluntad de las partes y no por la voluntad del estado. El laudo y el pacto arbitral son partes estructurales de un negocio jurídico complejo que por sus características hace poco conveniente la intervención del estado directamente o por conducto de sus órganos jurisdiccionales. La parte positiva de una posición como la antes señalada, está en que los árbitros

tendrían una mayor libertad y flexibilidad para determinar la forma de solucionar la controversia puesta a su consideración. (págs. 147-154)

De este modo, a través de esta teoría se sostuvo que el arbitraje tiene una naturaleza privada pues solo se desarrolla si es pactada en una relación contractual, en la cláusula compromisoria o también llamado convenio arbitral, para los defensores de esta teoría el arbitraje nace a través del contrato, y lo consideran de este modo en base a lo cual se indica que la intervención del Estado debe ser mínima o nula, ello con la finalidad de conseguir mayor amplitud del desarrollo de las facultades de los árbitros.

Para complementar este concepto cabe citar a Luis Puglianini Guerra (2012) a través del libro *La Relación Partes-Arbitro* haciendo referencia a Jaime David Abanto Torres manifestó sobre la teoría Contractualista:

El arbitraje no es más que la manifestación de dos convenios o contratos. Por un lado, el convenio arbitral en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir a un tercero o árbitro en caso de suscitarse algún conflicto, y en ese caso la resolución de éste deviene en obligatoria para las partes al haber sido aceptada previamente por ellas (contrato de compromiso) (pág. 23)

Por acuerdo de ambas partes se acepta acudir a arbitraje en caso se suscite algún problema durante la relación contractual, y este acuerdo es materializado en un contrato, el cual según sugiere la cita una vez concretado, obliga a las partes aceptar la decisión del árbitro. Por tanto, según lo manifestado por el autor se deslindan dos contratos siendo el primero

la cláusula compromisoria y el segundo el laudo arbitral, el cual deviene en obligatorio. Esta teoría fundó el carácter autónomo del arbitraje en la equiparación del acuerdo previo a la celebración del procedimiento, cuya manifestación de voluntad se entiende como la que constituye el contrato que ha de ser respetado y cumplido según su diseño en el ordenamiento, quedando a salvo el acceso a la entidad judicial para la resolución de la problemática surgida en razón de un desacuerdo posterior al laudo.

3.2.2 Teoría Jurisdiccionalista o Publicista.

Sobre esta teoría Marianella Ledesma Narvaez (2009) en el libro llamado *Jurisdicción y Arbitraje* señaló que:

Concurren otras posiciones que sostienen que el arbitraje es jurisdiccional por el rol subsidiario, complementario o revisor que asume la jurisdicción frente a las situaciones que se desencadenan en el procedimiento arbitral. Sin desconocer su origen contractual, su eficacia no puede lograrse sin la intervención de la jurisdicción (pág. 33)

Según sostuvo Marianella Ledesma el arbitraje es de naturaleza jurisdiccional debido a las siguientes razones: en primer lugar, el carácter revisor o complementario que tiene la jurisdicción respecto del procedimiento arbitral, ya que la justicia estatal puede reexaminar lo realizado durante el proceso de arbitraje, claro está que este nuevo examen está referido a condiciones de forma mas no de fondo y que en la realidad nacional se realiza a través del recurso de anulación, puesto que es la única vía de impugnación de un laudo; y en segundo lugar hace referencia a la ejecución de los laudos arbitrales, pues

para su efectivo cumplimiento, la parte interesada debe solicitar a la autoridad judicial emita el mandato de ejecución respectivo a fin de que se cumpla la decisión de los árbitros; es por ello que su eficacia depende de la jurisdicción ordinaria o estatal.

Importante resulta mencionar a Luis Puglianini Guerra (2012) citando a Fernando Vargas García en el libro denominado *La Relación Partes- Árbitro*, ya que aporta características a esta teoría, siendo las siguientes:

- 1) Los árbitros son jueces que realmente ejercitan actividad jurisdiccional del Estado. [...]
- 2) Los árbitros, no obstante ser particulares, quedan revestidos de jurisdicción, porque la ley ha conferido a las partes la facultad de colocar en cabeza de ellos, y por mientras desempeñen sus funciones, una parte de la soberanía del Estado para que en desarrollo de ésta decidan obligatoria y definitivamente el conflicto que se ventila. [...]
- 3) El Laudo es una verdadera sentencia.
- 4) La responsabilidad de los árbitros es idéntica a la que pesa sobre los Jueces del Estado. [...]. (pág. 25).

Tal cual se ha indicado antes, la teoría jurisdiccionalista reconoció su fundamento en el hecho de la participación del aparato judicial a fin de conseguir eficacia, mientras que por otro lado basó su postura en las similitudes advertidas entre el árbitro y el juez, equiparando los roles que ambos desempeñan, asimismo ocurre con el laudo y la

sentencia, pues para ellos si existe un medio alternativo de solución de controversias como el arbitraje es porque el Estado lo autoriza y dispone mediante ley, de este modo está sujeto a su control y su eficacia supeditada a aquel.

De otro lado Byron Sequeira (2017) en el artículo de revista denominado *Naturaleza Jurídica del Arbitraje* manifestó que “se trata, pues, de un proceso el que debe reconocérsele su naturaleza jurisdiccional, sin que la derivación de competencias que las partes les otorgan a los árbitros sea determinante para caracterizar el mismo” (págs. 25-38); se aprecia de lo recogido que la postura adopta una posición más radical excluyendo por tanto el carácter contractual del arbitraje, pues indica que no es determinante la designación que hacen las partes a los árbitros, para reconocer su naturaleza.

3.2.3 Teoría Mixta.

Silvia Barona Vilar (2006) en el libro denominado *Medidas Cautelares en el Arbitraje* expone sobre esta concepción:

Estas dos encontradas posiciones no tardaron en ir dando paso a una posición ecléctica, que asumía los componentes iusprivatistas y iuspublicistas del arbitraje, de manera que quienes defienden esta posición, por un lado, aceptan que en el nacimiento, el arbitraje es contractual, si bien en su desarrollo y conclusión incluida su eficacia es jurisdiccional (pág. 45 y 46).

Es claro que la teoría mixta asume a la teoría privatista y publicista como parte de la

naturaleza del arbitraje, aceptan que hay un acuerdo de voluntades de las partes que nace con el convenio arbitral, pero de otro lado el desarrollo del arbitraje se lleva a cabo por las leyes que dicta el Estado y que regula su desenvolvimiento, así como también la ejecución del laudo arbitral está supeditada a la autorización del poder judicial, por tanto ambas teorías son importantes para concebir su naturaleza.

Para Miguel Ángel Esbrí Montoliú (2015) en el artículo denominado *El Convenio Arbitral en el Derecho Español* citando a Jean ROBERT, sobre el particular: “concibe el arbitraje como «institución jurisdiccional libre», ya que si tiene un origen contractual, también es cierto que alcanza, por su finalidad, el rango de jurisdicción; una jurisdicción de naturaleza distinta a la común, pero de idénticos efectos” (pág. 55); de igual manera la idea de Miguel Esbrí acepta como es propio de esta teoría un origen contractual pero sin dejar de lado a la teoría jurisdiccional en el sentido que ambos procesos tanto el arbitral como el judicial se tratan de dos jurisdicciones distintas pero que persiguen un mismo fin.

3.3 Principio de Autonomía del Arbitraje y el Principio De “Kompetenz Kompetenz”

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2015) en el artículo de revista denominado *Principios y Derechos de la Función Arbitral*, sobre la autonomía del arbitraje indicaron lo siguiente:

La autonomía es entendida como “el respeto, al interior del propio órgano, del desarrollo de sus funciones, de modo que sus decisiones sean

imparciales y más aún se logre mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión pública. Esta autonomía debe ser entendida desde una doble perspectiva: a) como garantía de la administración de justicia, b) como atributo del propio árbitro (págs. 217-234).

La autonomía del arbitraje según lo descrito mantiene dos puntos importantes, el primero referido al respeto a las normas, funciones y los árbitros dentro del proceso arbitral, en pocas palabras que todas aquellas personas que participan del proceso lo hagan con la debida cautela y cuidado; esto con la finalidad de garantizar una decisión imparcial, y en un segundo punto de vista la autonomía es concebida como un atributo del árbitro, haciendo alusión a la independencia que sostienen para actuar con total libertad, lejos de cualquier injerencia, solo supeditado al estricto cumplimiento de la constitución y la ley.

Sin embargo no hay que dejar de lado que la manifestación de la voluntad de las partes para someterse al arbitraje también es un punto importante que enriquece la autonomía del mencionado proceso, pues a través de la confianza en su imparcialidad, que tienen las personas en los tribunales arbitrales para someter sus causas a su resolución, empodera a los mismos.

Ahora bien sobre el principio de kompetenz kompetenz se cita a Roque Caivano (2015) *El contrato de arbitraje y su autonomía respecto del contrato que lo contiene* indica “El principio de la separabilidad (autonomía), pensado para que los vicios que afecten el contrato no se trasladen a la cláusula arbitral, se complementa con el principio kompetenz-kompetenz, cuyo propósito es evitar la sustracción prematura de la

jurisdicción de los árbitros” (págs. 13-39); en un primer momento esta cita manifestó que gracias al principio de autonomía el convenio arbitral que consta en los contratos es totalmente independiente del contrato principal y por tanto si este tiene vicios que lo afectan, no perjudicará en ningún modo a la cláusula arbitral.

Posteriormente señala que este principio se complementa con el de kompetenz kompetenz, entendido por este como aquel que permite a los árbitros decidir sobre su propia competencia; por tanto, si existe algún cuestionamiento a su competencia serán ellos quienes pueden resolver sobre tal interrogante, del mismo modo actuarán incluso tratándose de cuestionamientos que se realicen al propio convenio arbitral y con más razón si se discute sobre el contrato principal. Una vez tomada esta decisión y en caso decidan su competencia sobre el asunto resolverán sobre el fondo.

El principio de kompetenz kompetenz fue acogido por primera vez mediante La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil UNCITRAL, que en su artículo 21°, numeral 1° de su Reglamento de Arbitraje, expresó lo siguiente “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado”.

Asimismo el mencionado principio ha sido acogido en el D.L. N° 1071- Decreto que norma el arbitraje; para discutir sobre ello cabe citar a los autores anteriormente mencionados Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2015) en

el artículo de revista llamado *Principios y Derechos de la Función Arbitral* que manifestaron:

El propio artículo 3° inciso 3° subraya la plena vigencia del principio kompetenz-kompetenz, el mismo que faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales, pretenda convocar la participación de jueces mediante la interposición de cualquier acción de naturaleza civil, constitucional o penal (págs. 217-234).

El artículo 3° del D.L. N° 1071, señala: “El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo”, en merito a ello los autores ratifican lo dicho anteriormente sobre el principio de kompetenz kompetenz, en el sentido de que son los árbitros quienes podrán decidir su competencia. Del mismo modo cabe hacer mención a otro artículo que también hace una clara referencia a este principio:

Artículo 41° inciso 1:

“El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”.

Como se puede observar nuestra norma también acoge el principio de autonomía y kompetenz kompetenz, siendo que ambos se complementan, pues tienen como finalidad la protección del convenio arbitral y por ende otorgar autonomía en las actuaciones de los árbitros e independencia para decidir sobre qué materia es arbitrable.

3.4 RECURSO DE ANULACION

Felipe Osterling Parodi (2005) en el artículo denominado *Arbitraje Nacional e Internacional en el Perú* sobre el recurso de anulación manifestó:

El recurso de anulación ante el Poder Judicial procede contra los laudos arbitrales dictados en una sola instancia o aquellos expedidos en segunda instancia arbitral. El recurso tiene por objeto revisar la validez del laudo, encontrándose prohibido el análisis del fondo de la controversia (pág. 26).

Evidentemente esta opinión emitida por Felipe Osterling Parodi se hizo teniendo como referencia la derogada Ley General de Arbitraje de 1996, que admitía el recurso de apelación y anulación como medios para la impugnación del laudo arbitral; sin embargo fue derogada en el año 2008 mediante el Decreto Legislativo N° 1071- Decreto Legislativo que norma el arbitraje, que sólo acepta al recurso de anulación como única vía para cuestionar la validez del laudo. Asimismo señala que el recurso de anulación tiene por objeto revisar cuestiones de forma de la decisión más no de fondo constituyéndose esta afirmación en una prohibición.

Flor De María Macías Orellana y Samael Alexander Alfaro Nolasco (2017) en su trabajo de tesis para obtener el título de licenciado en ciencias jurídicas señalaron:

El recurso de nulidad no fue instituido con el ánimo de cuestionar las decisiones adoptadas dentro de un proceso de arbitraje; podemos decir que trata de una garantía que brinda el estado constitucional de derecho para que los principios sobre los cuales debe adelantarse el proceso judicial, sean respetados incluso en los tribunales de arbitraje (pág. 162).

Según sostienen, el recurso de anulación no tiene como finalidad revisar los fundamentos que motivaron su decisión, sino que se trata de una garantía que otorga el Estado Constitucional del Derecho para revisar que el proceso de arbitraje se haya desarrollado respetando los principios que todo proceso debe sostener.

Para complementar la idea de la finalidad del recurso de anulación se menciona a Verónica Chiriboga Arteta (2012) en su trabajo de investigación para obtener el título de abogado denominado *La problemática actual de la acción de nulidad en contra de los laudos arbitrales*, manifestó:

Lo que da a entender que la acción de nulidad existe con el propósito de otorgar al estado un mecanismo de control judicial del proceso arbitral, que permite a la corte solamente conocer y revisar si en el proceso hay o no presencia de la causal de nulidad que sea alegada por la parte solicitante (pág. 28)

Por tanto, la finalidad del recurso de anulación es que el poder judicial pueda revisar y

tener una suerte de control del proceso de arbitraje, y examinar si durante el proceso se suscitó alguna causal que puede acarrear la nulidad del mismo, cabe mencionar que estas solo están referidas a cuestiones de forma y se encuentran detalladas en la ley de arbitraje. Finalmente se puede decir que el único recurso para poder cuestionar la validez de un laudo es el recurso de anulación, sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que los árbitros desconozcan el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones.

3.4.1 Causas y Efectos del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral.

Según el Decreto Legislativo N° 1071-2008- Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008) La primera causa para la anulación de laudo arbitral es la siguiente:

a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008)

Marcos Isique (2018) sobre lo descrito anteriormente indica: “El convenio arbitral será nulo cuando esté incurso en cualquiera de las causales previstas en el artículo 219° del Código Civil sobre acto jurídico. En los demás supuestos se observa también lo previsto en el citado código” (Isique, 2018).

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz

Fernandez , 2008)

Esta causal se aplica en caso un particular no haya podido hacer valer sus derechos porque no ha sido debidamente notificada o por cualquier otra razón, generando la vulneración al derecho de defensa, que además está reconocido constitucionalmente y cuya transgresión acarrea que se retrotraigan las actuaciones al momento en que se empezó con la violación al derecho mencionado.

c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008).

Causal que se encuentra ligada al respeto de la voluntad de las partes, a los acuerdos tomados por estos o a las normas a las que se sometieron, cuyos efectos son los siguientes: se puede reintegrar el tribunal arbitral si su composición no se ajustó a la voluntad de las partes, o este puede disponer en caso se hubiera vulnerado un acuerdo entre ambas partes reiniciar el proceso a dicho momento y del mismo modo ocurrirá si se ha transgredido el reglamento o la norma aplicable.

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión (Garcia

Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008).

Según esta causal los árbitros no podrán pronunciarse sobre aquello que no está sometido a su competencia, se habla de un pronunciamiento extrapetita o que lo haga de manera excesiva, es decir ultra petita.

De este modo si una materia no fue sometida a arbitraje podrá ser expuesta a un proceso arbitral siempre que haya sido contemplada en el convenio arbitral de lo contrario será objeto de revisión por el poder judicial.

e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008).

f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008).

g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral (Garcia Perez , Del Castillo Galvez , Fernandez Figueroa , & Araoz Fernandez , 2008).

Es importante que se cumplan los plazos previstos para resolver la controversia puesto

que, de no ser así, el tribunal arbitral estaría fuera de su competencia, y el laudo arbitral emitido sería nulo, además los plazos importan los límites a las actuaciones arbitrales y el respeto a la voluntad de las partes.

Para terminar con esta parte se menciona a Juan Carlos Díaz Colchado (2013) en la tesis denominada *Amparo y Arbitraje la Subsidiariedad del Amparo y el Recurso de Anulación del Laudo Arbitral* quien señaló:

De una lectura de las diferentes causales puede argumentarse que las causales previstas tienen un sustento constitucional. En efecto cuando se pone en duda la propia validez del convenio arbitral lo que en el fondo se quiere decir es que la autonomía de la voluntad de alguna de las partes ha sido prestada de manera viciada (pág. 257).

Las causales de nulidad del laudo tienen un trasfondo constitucional, puesto que de algún modo cuando se pone en duda la veracidad del convenio arbitral se vulnera la autonomía de la voluntad de una de las partes, aquella que le permite a los particulares decidir cuál vía es la más correcta para resolver sus problemas, afectando de este modo su derecho a la libertad reconocido por la constitución.

3.5 ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

En nuestro sistema jurídico, la normativa de arbitraje fue modificada significativamente a partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1071, el cual acabó con el régimen dual,

de recurso de apelación y anulación, regulado por la anterior Ley N° 26572, y estableció como único medio de impugnación del laudo al recurso de anulación; siendo el que nos compete en la presente investigación.

En el arbitraje de contratación pública el recurso de anulación del laudo arbitral ha tomado mucha fuerza; tal es así que muchas veces resulta ser una vía a la que se hace necesario recurrir para que por última vez las autoridades judiciales revisen lo desarrollado por los árbitros, evidentemente esto no debería ser así. En efecto, como señaló el profesor mexicano Francisco Gonzales de Cossio (2011): “El vínculo que existe entre las autoridades judiciales y los tribunales arbitrales no es de control es de mutua colaboración” (pág. 895); según Gonzales de Cossio la labor que realiza el poder judicial es de colaboración, puesto que en realidad lo que se pretende lograr con el recurso es conocer si el proceso arbitral se ha desarrollado con los principios que todo proceso debe tener para que exista una correcta administración de justicia.

Carlos Enrique Castro Torres (2016), sobre el recurso de anulación del laudo arbitral en las contrataciones del Estado, manifiesta lo siguiente:

La ley de arbitraje ha prescrito como respuesta, blindar al laudo de derecho que resuelve sobre las contrataciones del estado, estableciendo como único medio para impugnar el laudo al recurso de anulación (derogando el recurso de apelación), ha desprovisto como causal para el recurso de anulación la transgresión a la debida motivación o el debido proceso

material, y además ha prohibido bajo responsabilidad a la sala que conocerá la anulación, de pronunciarse respecto de la motivación del laudo (pág. 30).

Para el autor la prohibición de los jueces de revisar la motivación del laudo arbitral cuando se interpone un recurso de anulación constituye una trasgresión al control judicial que realizan; y también ocurre respecto de la prohibición de pronunciarse sobre el mismo.

Sobre lo mencionado se cree que no hay motivos razonables por las que no se deba realizar un control judicial de la debida motivación de los laudos arbitrales; al parecer la causa más evidente en la que se apoya el Estado para dicha prohibición es la autonomía del arbitraje; sin embargo, se cree que transgrede un derecho constitucional; más aún por una norma de menor jerarquía.

Ahora bien, nos preguntaremos ¿qué ocurre si se suscita algún problema en el contrato que se celebre entre un particular y el Estado?; El artículo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos da la respuesta: Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

Como se puede apreciar en caso suceda algún desacuerdo en los contratos celebrados con el Estado, este otorga alternativas inmediatas para su solución a través de la junta de

resolución de disputas, conciliación o arbitraje. Al respecto Castillo Freyre, Sabroso Minaya (2010) en el artículo denominado *Arbitraje Obligatorio y de Derecho en la Contratación Pública* manifestaron: “En efecto, como hemos venido sosteniendo a lo largo de los últimos años, estas disposiciones transformaron radicalmente la administración de justicia en el Perú” (Castillo Freyre & Sabroso Minaya , Legis, 2010); esto porque se incorporó a dichos mecanismos con carácter obligatorio para resolver alguna controversia entre los contratos de los particulares con el Estado.

Sobre la referida obligatoriedad Castillo Freyre y Sabroso Minaya (2011) citando a Carlos Cueva Morales en el artículo de revista llamado *El Arbitraje del Estado Peruano* manifestaron: “Si bien se establece que el arbitraje es de aplicación obligatoria, ello no significa negar el carácter consensual del arbitraje” (págs. 140-149); esto porque la entidad debe consignar una cláusula o convenio arbitral de ahí que se deduzca su aplicación obligatoria, pues debe ser aceptado por los postores que están interesados en la convocatoria; sin embargo, esto no desconoce el carácter consensual entre las partes puesto que los postores al participar en el proceso de contratación están de acuerdo con la entidad y consienten los términos establecidos en los procesos del Estado.

Por otro lado y describiendo específicamente al arbitraje, que es la institución que interesa en el presente trabajo de investigación, el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Kuczynski Godard & Thorne Vetter , Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 2017), señala que el arbitraje al que se someten las controversias es nacional y de derecho.

De este modo es conveniente entender qué significa el arbitraje de derecho, indicando que esta es una clasificación del arbitraje según las potestades de los árbitros por tanto se podrá decir que en el arbitraje de derecho el árbitro resuelve la controversia de acuerdo a las normas o leyes aplicables, es decir ciñéndose a estas en todo el desarrollo del proceso, en contraposición tenemos al arbitraje de conciencia o equidad, que quiere decir que los árbitros prescinden de las leyes y resuelven de acuerdo a lo que ellos consideran justo y equitativo.

Sobre el particular Mario Castillo Freyre (2009) en su libro denominado *El Arbitraje en la Contratación Pública* indicó:

Ahora bien, en materia de Contratación Pública, todas las legislaciones de nuestro país han contemplado al arbitraje de derecho como aquél que se aplicará para la solución de controversias. Ello, de seguro, porque el legislador ha querido y quiere evitar que precisamente el arbitraje sobre esta materia sea arbitrario o subjetivo (pág. 34).

Evidentemente siendo el Estado parte de un contrato se debe prestar mucha más objetividad e imparcialidad en sus relaciones jurídicas, por tanto, esta sería la razón por la que se ha elegido este tipo de arbitraje.

Además de ello, el artículo mencionado indicó que se incluye un arbitraje nacional, denotando la clasificación del arbitraje según su jurisdicción, el arbitraje nacional es aquel que se ciñe a las leyes que sobre el tema se han dictado dentro de la República y por

árbitros dentro de nuestro territorio, y por otro lado el arbitraje internacional es aquel en el cual se da cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.

b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios.

c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.

Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral.

Del mismo modo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Kuczynski Godard & Thorne Vetter , Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 2017) señala que se puede celebrar un arbitraje institucional o ad hoc según se haya dispuesto en el convenio arbitral del contrato; cabe señalar que el arbitraje institucional es aquel que es organizado y llevado a cabo por una institución arbitral y que además deberá tratarse de una institución acreditada ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, de otro lado, el arbitraje ad hoc es aquel que es dirigido por un árbitro o tribunal libre sin que intervenga ninguna institución arbitral, si se elige este tipo de arbitraje la parte interesada deberá remitir la solicitud por escrito a la otra parte para llevar a cabo el proceso.

Cabe señalar además que la ley señala ciertos supuestos en los que se deberá aplicar obligatoriamente el arbitraje ad hoc:

- Si en el convenio arbitral incluido en el contrato no se precisa que el arbitraje es institucional.
- No se designa a una institución arbitral determinada.
- No se incorpore el convenio arbitral en el contrato.

3.5.1 Garantía para interponer el recurso de anulación

La normativa en contrataciones con el estado Ley N° 30225 y su reglamento han atravesado nuevamente una modificación con el Decreto Legislativo N° 1341 (Kuczynski Godard , Zavala Lombardi , & Thorne Vetter, Decreto Legislativo N° 1341-2017-EF, 2017) y el Decreto Supremo N° 056-2017 (Kuczynski Godard & Thorne Vetter , Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 2017); pero en particular ha sido de suma relevancia el artículo 45.8 del D.L N° 1341 (Kuczynski Godard , Zavala Lombardi , & Thorne Vetter, Decreto Legislativo N° 1341-2017-EF, 2017) el cual prescribe lo siguiente: (...) La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad, conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso.

Como señala el artículo la interposición de recurso de anulación está condicionada a la

presentación de una carta fianza y esta es solo aplicable al contratista, además deberá tener una vigencia mínima de seis meses y tendrá que ser renovada por todo el tiempo que dure el trámite. Sin embargo, el artículo 231 del derogado reglamento de la ley de contrataciones del estado (aprobado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF), al tratar el recurso de anulación de laudo, establecía que: (...) como requisito para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá establecerse en el convenio arbitral que la parte impugnante deberá acreditar la constitución de fianza bancaria a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

Es decir antes de la modificación a la ley de contrataciones con el estado Ley N° 30225 se contemplaba la incorporación de la carta fianza como una posibilidad para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral siempre que se hubiera establecido en el convenio; lo más controversial es que ahora con la modificación a la ley anteriormente citada; lo que antes resultaba ser una posibilidad se convierte en un mandato imperativo, un requisito de admisibilidad para la interposición de la anulación del laudo arbitral. Lo más grave es que el D.L N° 1071 (García Pérez , Del Castillo Galvez , Fernández Figueroa , & Araoz Fernández , 2008) que normal el arbitraje en su artículo 66.1 señala lo siguiente:

(...) La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar la admisión del recurso, la corte superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el caso,

concederá la suspensión.

El mencionado artículo dispone como regla general el otorgamiento de una carta fianza si el contratista solicita la suspensión de la ejecución del laudo arbitral; si bien lo relatado no es de orden imperativo pues para las partes se contempla como una necesidad para quien requiera suspender los efectos del laudo mientras dura el proceso del recurso de anulación; siendo así, le sumamos una condición, una garantía más, al proceso de anulación del laudo; por ello, esto a todas luces constituye una clara y grave vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva pues para muchos contratistas no existirían reales posibilidades de cumplir con el otorgamiento de cartas fianzas, restringiendo el derecho de acudir a la justicia.

Para aportar a este tema se cita el trabajo realizado por el abogado Gonzalo García Calderón Moreyra (2017) en el artículo de revista llamado *El recurso de anulación y el requisito de admisibilidad en la ley de contrataciones* quien manifiesta opinión similar a la nuestra indicando:

(...) Como hemos advertido ya, el artículo 45.8 del Decreto Legislativo N° 1341 incorpora un cambio radical en la lógica y alcance del recurso de anulación, estableciendo de manera obligatoria, la necesidad de constituir una garantía, como requisito para la procedencia del recurso, restringiendo con ello la posibilidad de corregir algún vicio o exceso en la decisión adoptada en el laudo (págs. 16-21).

El autor describió el carácter obligatorio del otorgamiento de la carta fianza, asimismo

expresó su preocupación por la limitación que constituye ya que si alguna de las partes no puede otorgar esta carta fianza no será posible subsanar algún vicio ocurrido con la emisión del laudo arbitral. Diferente opinión mantiene Ricardo Gandolfo Gutiérrez (2017); quien señala lo siguiente:

La legislación ha optado por no dejar nada librado al azar y ha fijado la forma de calcular el monto de la fianza a través de una fórmula que puede ser discutible pero que zanja el asunto e impide que pueda entorpecerse una reclamación por un tema menor. Discrepo de esta posición por la sencilla razón de que liberar la interposición del recurso de anulación conduciría a su multiplicación incontrolada (Gandolfo Gutierrez , 2017).

Según Ricardo Gandolfo la garantía de la carta fianza termina con la situación que se genera muchas veces con la interposición de recursos de anulación por temas que no son de mucha relevancia; de este modo, para él eliminar esta garantía supone que todas las partes que no se han sentido conformes con la decisión tomada por el árbitro presentarían su recurso de anulación llegando a una multiplicación incontrolada de los mismos.

Difiero totalmente con esta opinión, pues según indica el abogado Ricardo Gandolfo Gutiérrez si suprimimos la garantía de la carta fianza, el recurso de anulación podría interponerse de forma indiscriminada, pues a mi opinión esto no es correcto, si la intención del legislador es que el recurso de anulación del laudo arbitral en materia de contrataciones con el estado no se convierta en un recurso del que todo abogado debe hacer uso, alargando el proceso de contrataciones con el Estado, la salida no es la más viable pues se ha ido más allá de lo razonable evidenciando la dificultad del contratista

de acceder a la justicia ordinaria y por ende limitando derechos fundamentales.

3.5.6 Exposición de motivos de la modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sobre la exposición de motivos de la modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 056-2017-EF que también prevé el otorgamiento de la garantía de la carta fianza para la interposición del recurso de anulación, señala en el inciso 2.13.2.3. Anulación de Laudos lo siguiente:

El reglamento prevé en el artículo 197-A, un conjunto reglas que desarrollan el requisito para la interposición del recurso de anulación del laudo que establece el segundo párrafo del numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley. Así, se señala que para la interposición del recurso de anulación del laudo, el contratista debe presentar una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a primer requerimiento, con una vigencia no menor de seis (6) meses, debiendo ser renovada por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. Dicha carta fianza debe otorgarse a favor de la Entidad, por una cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la suma que ordene pagar el laudo. La reforma al Reglamento también precisa que si el laudo, en todo o en parte, es puramente declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el valor de la carta fianza debe ser equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato original. Si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute. En caso contrario se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad.

Finalmente, el artículo 197-A precisa que las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación deben ser remitidas por el procurador público o la Entidad, según corresponda, al OSCE en el plazo de diez (10) días hábiles de notificadas para su registro y publicación, bajo responsabilidad (numeral 197-A.4).

Evidentemente la exposición de motivos no describe las razones por la que se modificó el artículo 45° de la ley de contrataciones del Estado, solo hace una descripción del artículo, explica los plazos y porcentajes en las que dichas cartas fianzas deben otorgarse en caso sean cuantificables o no lo sean. Sin embargo no manifiesta los verdaderos motivos de la introducción de la carta fianza, pese a ello de todo la información recopilada hace suponer que quizás la verdadera intención del Estado ha sido que no se interpongan demasiados recursos de anulación como una última alternativa al que todo abogado debe acudir con el fin de que se revise la decisión emitida en sede arbitral; esto se advierte como consecuencia de la falta de motivación de la misma ley, siendo así el reglamento carece también de una motivación jurídica adecuada.

Sin embargo, es prudente dejar en claro que lejos de lograr lo propuesto se considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, pues la garantía de la carta fianza es una condición económica que no todos los contratistas pueden otorgar, peor aún esto solo es aplicable al contratista, generando dificultades solo en los particulares, lo que resulta ser además discriminatorio.

A través de esta investigación también hemos podido dar cuenta que no es el único

obstáculo para la interposición de tal recurso, además de ello la ley de arbitraje incorpora la emisión de una carta fianza en caso la parte que desea impugnar el laudo quiera suspender los efectos del mismo, dispositivo que si bien no es de cumplimiento obligatorio, es necesario para continuar con el tramite pues está claro que si una de las partes hace uso del recurso de anulación es porque se niega a que la decisión emitida en el laudo se haga efectiva.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Civil y Procesal Civil.

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar este conformada por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01.

4.1. Análisis de los resultados:

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional.

De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se ha podido verificar mediante la plataforma virtual de acceso a expedientes judiciales, el contenido de las sentencias en los casos seleccionados y que a continuación se detalla en las respectivas tablas.

EVALUACIÓN DEL CRITERIO TÉCNICO JURÍDICO DE SENTENCIAS DE VISTA SOBRE RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL DE LAS SALAS CIVILES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE			
EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	ARGUMENTO JURÍDICO	CRITERIO EN RAZÓN DEL FALLO
Expediente N°: 00030-2017-0-1706-SP-CI-02	SEGUNDA SALA CIVIL	Tratándose de las causales previstas en los incisos d. y e. del numeral 1 de este artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso contrario, la anulación será total	NEGATIVO
Expediente N°: 00111-2017-0-1706-SP-CI-01	PRIMERA SALA CIVIL	Es necesario indicar en primer término que esta Sala Especializada Civil no es competente para revisar el fondo de lo decidido en el proceso arbitral por tratarse de un proceso autónomo que se regula por sus propias reglas.	NEGATIVO
Expediente N°: 00109-2017-0-1706-SP-CI-02	SEGUNDA SALA CIVIL	En el caso de autos se ha verificado que la parte demandante no solicitó ante el tribunal arbitral la "rectificación, interpretación, integración, o exclusión", para efectos de corregir lo que ahora pretende que se haga con este recurso de anulación, siendo así, no tiene interés para obrar, por lo que la demanda no puede ser atendida.	NEGATIVO
Expediente N°: 00129-2017-0-1706-SP-CI-01	PRIMERA SALA CIVIL	De lo acotado se infiere que por el principio de legalidad, el órgano jurisdiccional competente para conocer del proceso de anulación de un laudo arbitral viene a ser la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del lugar donde se desarrolló el arbitraje.	NEGATIVO
Expediente N°: 00078-2016-0-1706-SP-CI-02	SEGUNDA SALA CIVIL	Se tiene que la parte recurrente no manifestó en su momento oportuno, por escrito y de manera inequívoca, al tribunal arbitral esta infracción del plazo para laudar, e incluso admitió esta alteración del plazo, puesto que a pesar que ya sabía que no se estaba respetando el trámite, sin	NEGATIVO

		embargo, esperó a que se emitiera el laudo, para recién allí presentar su escrito.	
--	--	--	--

SENTENCIAS INCOMPATIBLES CON LA MATERIA DE ANULACIÓN DE LAUDO REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN JUCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE	
EXPEDIENTE	MATERIA
Expediente N°: 00648-2017-0-1706-JR-CI-05	NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 00980-2017-0-1706-JR-CI-01	IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO
Expediente N°: 01001-2017-0-1706-JR-CI-05	NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Expediente N°: 01702-2017-0-1706-JR-CI-03	IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 03218-2015-0-1706-JR-CI-06	DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 00027-2016-0-1706-JR-CI-04	IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 00530-2006-0-1707-JM-CI-01	ACCION DE INCUMPLIMIENTO
Expediente N°: 00686-2016-0-1706-JR-CI-03	DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 02209-2007-13-1706-JR-CI-04	ES UN CUADERNO DE MULTAS- EL EXPEDIENTE PRINCIPAL TIENE COMO MATERIA NULIDAD DE ACTO JURIDICO

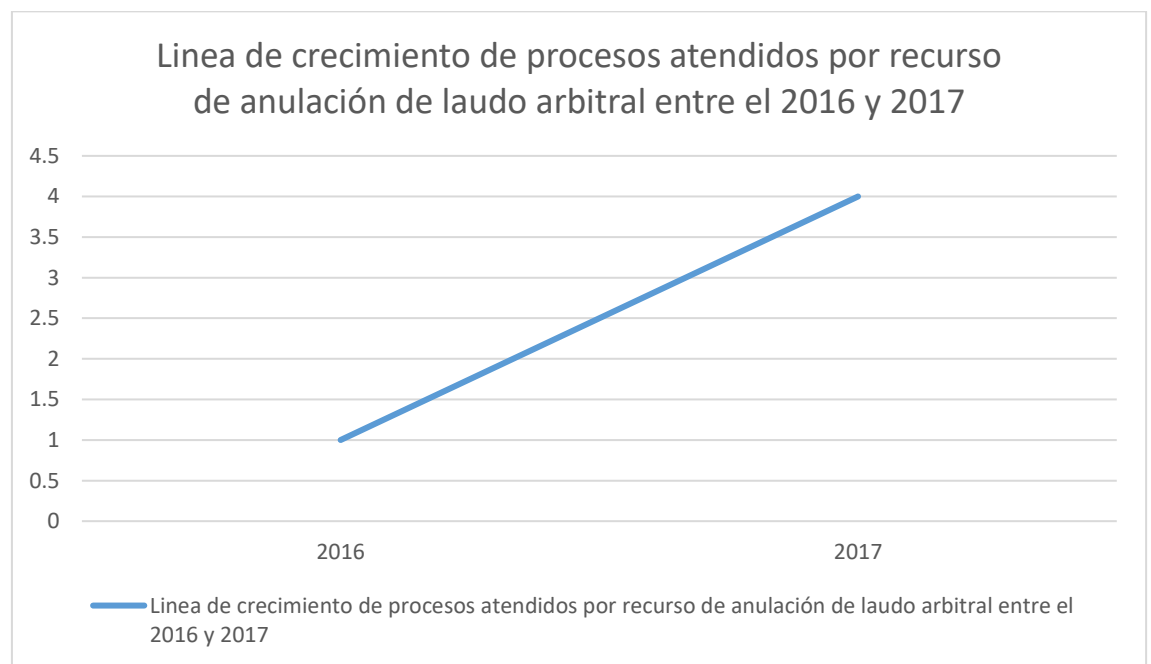
Expediente N°: 01331-2016-0-1706-JR-CI-01	IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 01250-2016-0-1706-JR-CI-04	DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 01219-2016-0-1706-JR-CI-06	IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 01558-2016-0-1706-JR-CI-06	DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Expediente N°: 01583-2016-0-1706-JR-CI-02	DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

De la lectura de las tablas construidas, se puede denotar que existe un problema en el sistema de información judicial en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, puesto que se advierte en razón al contenido observado de cada uno de los casos, que catorce de ellos tienen una materia distinta a consignada en la información que se ha proporcionado, siendo únicamente cinco de ellos referidos a anulación de laudo arbitral. Podemos deducir entonces que tal circunstancia obedece a la falta de conocimiento sobre la naturaleza jurídica del recurso de anulación de laudo arbitral, aspecto que está bajo la responsabilidad de los operadores de justicia; lo cual constituye limitación al análisis desarrollado en esta investigación y que en su momento se sugerirá la contemplación por parte del Comité Ejecutivo del Poder Judicial en la sede Lambayeque.

Luego de la indicación de este aspecto negativo, es prudente hacer uso de la información recuperada en la primera tabla; de lo cual se establecen los siguientes razonamientos:

1. Se aprecia que la instauración de procesos que acceden a la revisión en segunda instancia por razón de nulidad de laudo arbitral, es reducida, al punto de observarse 4 sentencias de vista durante el año 2017 y sólo una en el 2016.
2. Que, bajo el entendimiento de que la finalidad de incorporar la garantía que representa la carta fianza, es reducir el índice de requerimientos antojadizos de la nulidad de laudos arbitrales y que, tal incorporación data del año 2017; entonces, se concluye de que no surte una acción eficaz, puesto que de la cantidad de 1 expediente por año, se ha incrementado a 4 en el año que entra en vigencia la carta fianza.

Tal resultado se puede representar en el siguiente gráfico:



Finalmente, luego de establecer la ineficacia de la exigencia de la garantía que representa la carta fianza, se puede indicar que ello constituye una falta de justificación jurídica válida para su incorporación; por lo mismo que dicho rigor significa la afectación directa del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.

4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones. Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

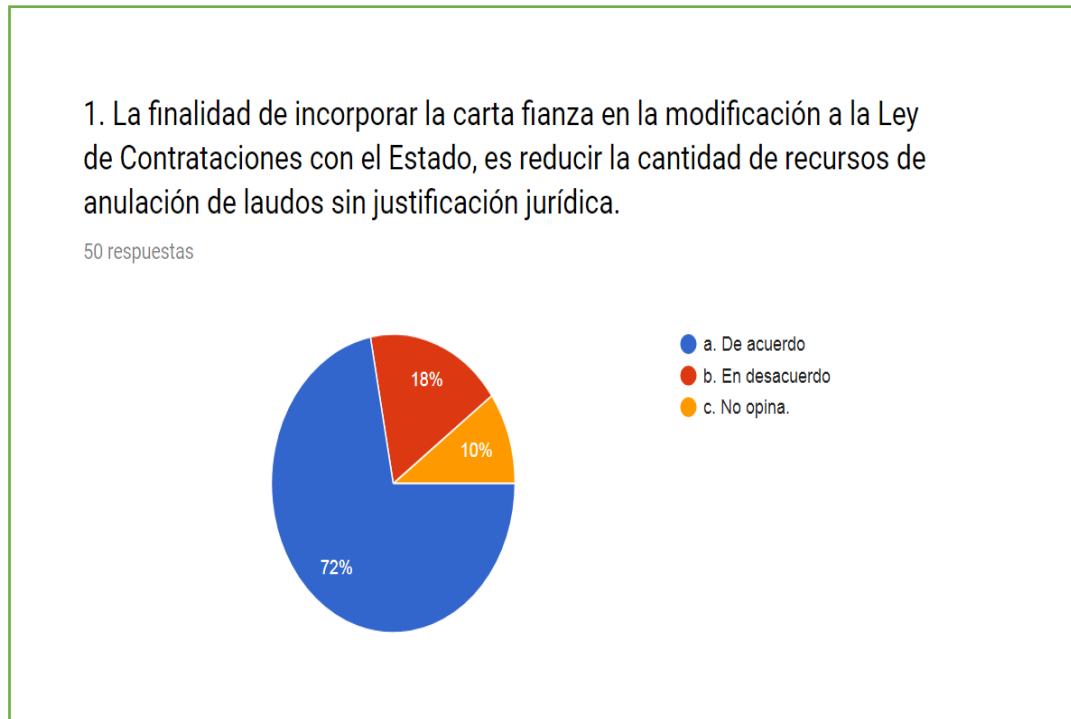
TABLA N° 01

1. La finalidad de incorporar la carta fianza en la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado, es reducir la cantidad de recursos de anulación de laudos sin justificación jurídica.

Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	36
b. En Desacuerdo	09
c. No Opina	05
TOTAL	50

Tal cual se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la primera afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento de la finalidad de incorporar la carta fianza en la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado, es reducir la cantidad de recursos de anulación de laudos sin justificación jurídica, se tiene 36 individuos están de acuerdo con esta postura, 09 están en desacuerdo y 05 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

GRAFICO N°01



Se aprecia de los gráficos porcentuales que el porcentaje más alto es de 72% que describe a la población que se encuentra de acuerdo con la posible finalidad de la incorporación de la carta fianza, son más de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado sobre el concepto propuesto, mientras que un porcentaje menor de personas prefieren no opinar, esto es un 10 %, lo que hace suponer que quizás toman esta decisión por desconocimiento del tema.

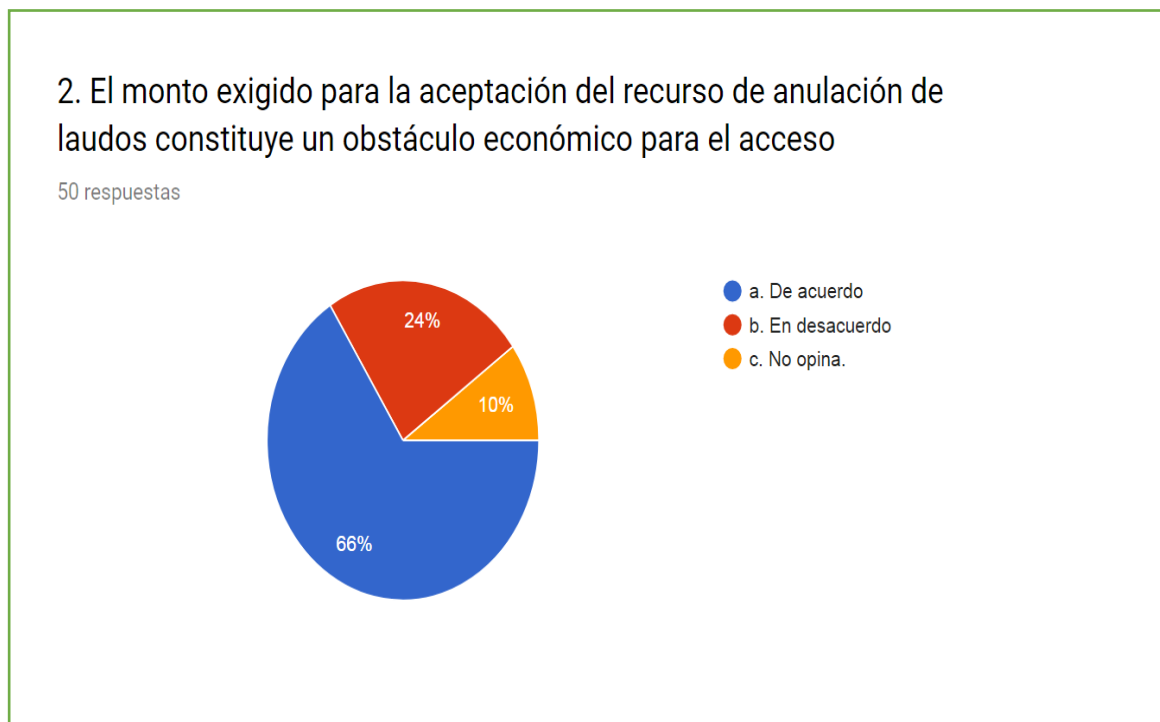
TABLA N° 02

2. El monto exigido para la aceptación del recurso de anulación de laudos constituye un obstáculo económico para el acceso a la tutela jurisdiccional

Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	33
b.En Desacuerdo	12
c. No Opina	05
TOTAL	50

Como se denota del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la segunda afirmación, respecto al monto exigido para la aceptación del recurso de anulación el cual constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, se tiene 33 individuos están de acuerdo con esta postura, 12 están en desacuerdo y solo 05 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

GRAFICO N° 02



Tal como se aprecia de los gráficos porcentuales el porcentaje más alto es del 66%, de la población jurídica que está de acuerdo con la afirmación relacionada con el obstáculo económico que significa la carta fianza, constituyéndose más de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado que permite reconocer como obstáculo a dicha figura jurídica, sin embargo un porcentaje menor prefiere no opinar, esto es un 10 % se cree que opinan de este modo en razón del desconocimiento.

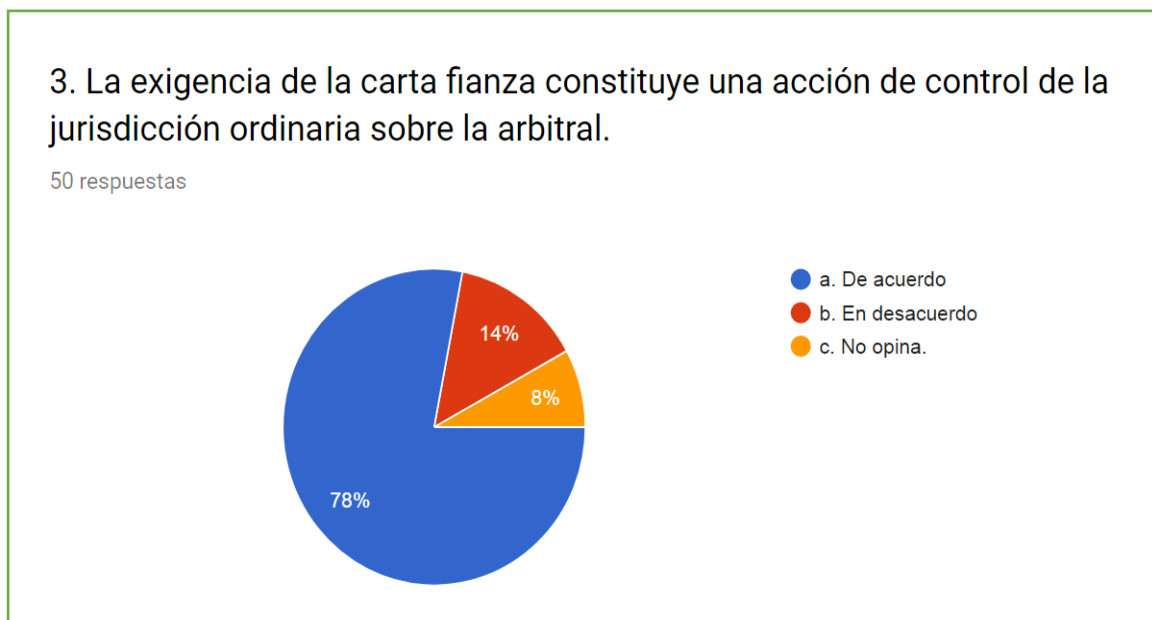
TABLA N° 03

3. La exigencia de la carta fianza constituye una acción de control de la jurisdicción ordinaria sobre la arbitral

Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	39
b. En Desacuerdo	07
c. No Opina	04
TOTAL	50

Como se desprende del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la tercera afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto a si la carta fianza y su exigencia constituye una acción de control de la jurisdicción ordinaria sobre la arbitral, se tiene 39 individuos están de acuerdo con esta postura, 07 personas están en desacuerdo y solo 04 han preferido no opinar sobre el particular lo que significa un porcentaje mínimo, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

GRAFICO N° 03



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 78% relacionado con la población jurídica que se encuentra de acuerdo con la afirmación, constituye más de la mitad de los operadores jurídicos que han opinado bajo la consideración de la existencia o necesidad de un control, tal reconocimiento denota la aproximación a la idea propuesta por la tesis, mientras que un porcentaje considerable está relacionado con el grupo de personas que prefieren no opinar, esto es un 08 % de la población jurídica que podría estar adoptando esta actitud en razón del desconocimiento.

TABLA N° 04

4. La tutela jurisdiccional efectiva surte sus efectos en todos los ámbitos jurisdiccionales, por lo mismo que procura su garantía en todos ellos.

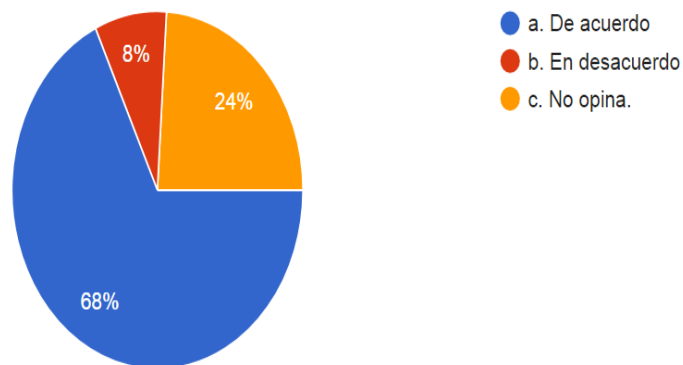
Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	34
b. En Desacuerdo	04
c. No Opina	12
TOTAL	50

Tal como se puede apreciar del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la cuarta afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto a los efectos que surte la tutela jurisdiccional efectiva en todos los ámbitos jurisdiccionales por lo que se debe procurar su garantía en todos ellos, se tiene 34 individuos están de acuerdo con esta postura, 04 están en desacuerdo y por un porcentaje considerable 12 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

GRAFICO N° 04

4. La tutela jurisdiccional efectiva surte sus efectos en todos los ámbitos jurisdiccionales, por lo mismo que procura su garantía en todos ellos.

50 respuestas



Se aprecia de los gráficos porcentuales que el porcentaje más alto es del 68% relacionado con la población jurídica que está de acuerdo a la interrogante planteada, deduciéndose que la garantía respecto a la tutela es posible exigirse en el ámbito tanto arbitral cuanto judicial, mientras que un porcentaje menor del 24% está relacionado al grupo de personas que prefieren no opinar y en un mínimo porcentaje de 08% está relacionado con aquellos que están en desacuerdo en que la tutela jurisdiccional efectiva procura su garantía en todos los procesos.

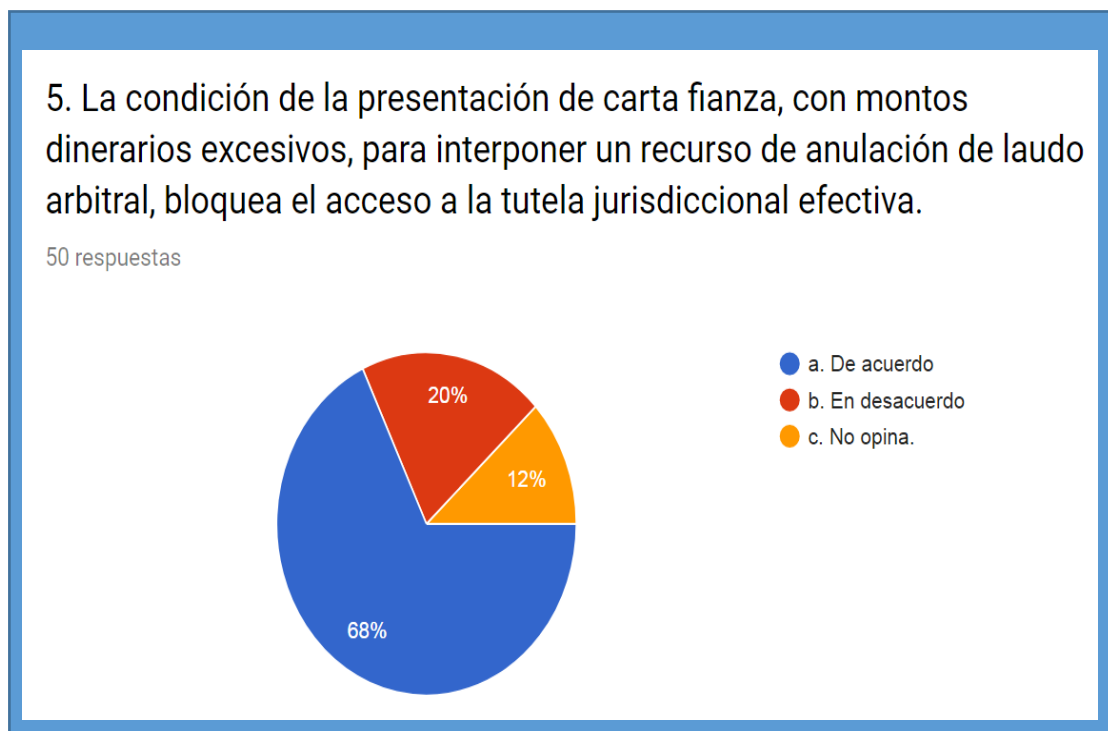
TABLA N° 05

5. La condición de la presentación de carta fianza, con montos dinerarios excesivos, para interponer un recurso de anulación de laudo arbitral, bloquea el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.

Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	34
b. En Desacuerdo	10
c. No Opina	06
TOTAL	50

Como se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la quinta afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto a que la presentación de la carta fianza constituye una condición de un monto dinerario excesivo para interponer un recurso de anulación de laudo arbitral, bloqueando así el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, se tiene que 34 individuos están de acuerdo con esta postura, 10 están en desacuerdo y una cantidad mínima han preferido no opinar, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

GRAFICO N° 05



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 68% relacionado con la población jurídica está de acuerdo con la afirmación propuesta lo cual permite entender a este requisito como una traba para el acceso a la justicia, constituyendo más de la mitad de los operadores jurídicos mientras que un menor porcentaje está relacionado con el grupo de personas que están en desacuerdo y sin embargo un 12% del total de los encuestados prefieren no opinar.

TABLA N° 06

6. La derogación de la exigencia de carta fianza para interponer el recurso de anulación de laudo arbitral permitirá garantizar la tutela jurisdiccional efectiva.

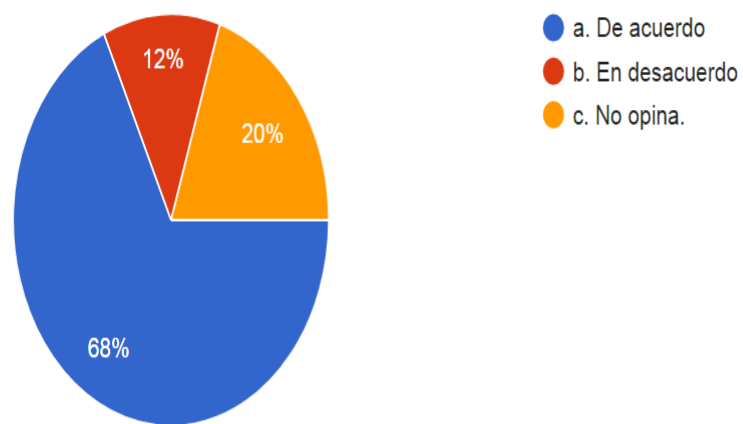
Alternativas:	Cantidad
a. De Acuerdo	34
b. En Desacuerdo	06
c. No Opina	10
TOTAL	50

Se aprecia del resultado que al menos 34 de los encuestados está de acuerdo con la derogación de la exigencia de la carta fianza para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral, lo cual permitirá garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, mientras que 10 de ellos prefiere no opinar quizás por desconocimiento del tema y solo 06 de los encuestados está en desacuerdo con la afirmación propuesta.

GRAFICO N° 06

6. La derogación de la exigencia de carta fianza para interponer el recurso de anulación de laudo arbitral permitirá garantizar la tutela jurisdiccional efectiva.

50 respuestas



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 68% relacionado con la población jurídica que se encuentra de acuerdo con la afirmación constituyéndose más de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado respecto a la necesidad de eliminar el requisito criticado, mientras que en un 20 % prefiere no opinar y un 12% está en desacuerdo.

CAPITULO V

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

5.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva”

¿De qué manera se puede describir adecuadamente la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva?

El concepto de la tutela jurisdiccional efectiva se formó a partir de la idea del derecho de acción que logro conciliar el derecho material y el derecho procesal, de ahí se deslinda la naturaleza procesal del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tal cual lo ha señalado el Tribunal Constitucional en anteriores oportunidades.

En ese sentido Omar Sumaria Benavente (2009), en el artículo de revista denominado *El Sistema de la Tutela Jurisdiccional: La disputa por la construcción de un modelo procesal en América Latina* indica:

La Tutela Jurisdiccional se convierte ahora en el producto de la interacción de dos bienes, por un lado un bien público cuyo detentador es el Estado, denominado “JURISDICCION” y por otro lado un bien de carácter privado cuyos depositarios son las personas (individuales o jurídicas) denominado “ACCION” (pág. 16)

Entonces la tutela jurisdiccional es un concepto amplio que no solo atañe al ciudadano por el hecho de accionar para solicitar la tutela de sus derechos sino que además participa el Estado emitiendo una respuesta a la solicitud y encaminando el proceso hasta obtener una sentencia y finalmente cumplir lo resuelto por esta, otorgándole efectividad.

Sin embargo no se debe dejar de lado el matiz constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva pues en un marco constitucional es un derecho fundamental de la persona humana, reconocido en nuestra Constitución Política. Tal como está consignado en el inciso 3° del artículo 139 ° de nuestra Carta Magna; del mismo modo en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y en el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Resulta importante señalar que la tutela jurisdiccional efectiva no es citada de manera independiente en estos artículos sino que además se menciona al debido proceso, por ello diremos que ambas figuras jurídicas coexisten, como lo indica el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 8123-2005-PHC/TC:

(...) la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos (pág. 03).

Tal como señala el tribunal constitucional, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso se encuentran relacionadas entre sí; el debido proceso se encarga de observar el debido cumplimiento de las reglas, principios y normas del proceso mientras que la tutela

jurisdiccional efectiva es una garantía de acceso al proceso y de la obtención de una decisión justa y efectiva, por tanto la creación de cualquier exigencia, requisito o norma procesal con la intención de limitar el acceso a un proceso ordinario será inconstitucional pues se trataría de la vulneración a un derecho fundamental consagrada en nuestra Constitución Política.

5.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la configuración procesal para la anulación de los laudos arbitrales”

El recurso de anulación de laudo arbitral ha sido instituido con la finalidad de revisar el desarrollo que provocó el resultado del proceso de arbitraje o en su caso del laudo por las causales expresamente establecidas en la norma. Por tanto podemos decir que el recurso de anulación es uno de los medios más importantes a través del cual se puede acudir a la jurisdicción ordinaria para desestimar un laudo arbitral.

Cabe mencionar además que es un mecanismo a través del cual los jueces pueden controlar si los árbitros han respetado el convenio arbitral y lo resuelto en sede arbitral por tanto solo se revisará cuestiones de forma y no de fondo.

Vista la circunstancia que permite identificar a la anulación del laudo como una herramienta que permite el control del Poder Judicial sobre la jurisdicción arbitral, corresponde aclarar que existe otro tipo de control distinto al constitucional; tal es así que el recurso de anulación, el inciso 2° del artículo 63° prescribe que tratándose de las causales previstas en los incisos a,b,c y d del numeral 1° solo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso ante el tribunal por la parte afectada y estas fueron

desestimadas; de este modo la norma deja en claro que en el caso de las cuatro primeras causales para interponer el recurso de anulación previamente se deberá solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, la interpretación de cualquier extremo oscuro, la integración del laudo por haberse omitido cualquier extremo, así como la exclusión de cualquier extremo que se haya citado sin que haya sido objeto de su conocimiento, tratando de esta manera de corregir ciertos errores del laudo arbitral en su misma sede; de este modo se evita acudir al poder judicial, sin embargo la creación de un nuevo requisito complica el acceso a la justicia, más aun si se trata de un requisito referido al aspecto económico como lo es el otorgamiento de una fianza el cual constituye un óbice para la interposición del mencionado recurso.

Ahora bien, para el acceso a la justicia ordinaria según se deslinda de la Constitución Política de nuestro país en su artículo 138° indica que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial, por tanto cualquier persona que necesita acudir al poder judicial no debe ser condicionada de ninguna manera mucho menos con la creación de requisitos económicos siendo además que otra de las características fundamentales de la justicia ordinaria tal como se desprende del artículo 139° numeral 16° de nuestra Carta Magna es el principio de gratuidad, artículo que refuerza lo reseñado anteriormente.

5.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los efectos que produce la incorporación de la carta fianza mediante la modificación en el Art. 45. Inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1341”

El 03 de abril del 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341-2017 que modifica la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado, el cual dispone en su artículo 45° inciso 8 que la interposición del recurso de anulación de laudo por el contratista requiere de presentar fianza bancaria solidaria incondicionada y de realización automática en favor de la entidad, conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, con una vigencia no menor a seis meses, renovable por todo el tiempo que demore el trámite del recurso. Cabe precisar los montos que indica el Reglamento el cual señala que dicha carta fianza se otorga a favor de la entidad por una cantidad equivalente al 25% del valor de la suma que ordene pagar el laudo. Asimismo indica que si el laudo en todo o en parte es puramente declarativo o no es valorizable en dinero si requiere de liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el valor de la carta fianza será equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato original. Por último señala que si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute, en caso contrario se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad. Debemos agregar además que este nuevo requisito para la interposición del recurso de anulación es únicamente imputable al contratista, transgrediendo su derecho de acceso a la justicia. Cabe mencionar además que por el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 2° inciso 2° todas las personas son iguales ante la ley, nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica; por tanto la ley ha de aplicarse a un grupo de sujetos que desean obtener justicia acudiendo ante el Poder Judicial y que los convierte en iguales, por ello

no debe hacerse ningún tipo de distinciones, resulta ser diferente en sede arbitral pues en esta sede si corresponde el pago de derechos onerosos ya que esta es un medio alternativo y distinto de la justicia ordinaria que al ser un servicio público no puede tener esta característica incorporada en un requisito que otorga acceso a la tutela.

En efecto, la creación de un nuevo requisito para la interposición del recurso de anulación resulta a todas luces una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva contraviniendo el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú y con ello un derecho fundamental bajo la premisa, que la intención real del legislador con la creación de este requisito es evitar que se haga uso de este recurso como si fuera una suerte de segunda instancia a la que todo abogado debe necesariamente acudir como última alternativa a su problema. Sin embargo se cree que este problema no se puede encubrir con la exigencia de un nuevo requisito, que evidentemente resulta difícil de cumplir para los contratistas.

Peor aún el Decreto Legislativo que norma el arbitraje en su artículo 66 indica que la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento de laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable; por tanto si las partes desean suspender la ejecución del laudo arbitral también debe otorgarse una fianza lo que resultaría en el otorgamiento de dos cartas fianzas, lo cual claramente es ilógico y de difícil cumplimiento.

5.4. Resultado de Validación de Variables

En esta parte del presente trabajo se deben recoger las ideas que surgieron con la discusión de los objetivos para poder verificar su validez y posteriormente construir la hipótesis conclusiva, que será contrastada con la hipótesis inicial, para lo cual tenemos el siguiente desarrollo:

5.4.1. Respecto a la variable independiente: La derogación de la incorporación de la carta fianza generada por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado.

Esta variable ha recibido la denominación de independiente dentro de la ubicación del presente trabajo de investigación, debido a que es la razón o causa a investigar.

En el presente capítulo se verificará si resulta jurídicamente válida la sugerencia de derogar la incorporación de la carta fianza generada por la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado; puesto que a través de este requisito económico se ha generado un obstáculo para la interposición del recurso de anulación y por tanto al acceso a la justicia. Siendo que además el mencionado requisito es únicamente aplicable al contratista, con lo que se atenta al principio constitucional de igualdad ante la ley, asimismo la onerosidad de la condición afecta el principio de gratuidad de la justicia.

Siendo así, la incorporación del requisito de la carta fianza para interponer el recurso de anulación atenta principios constitucionales, por tanto la variable se valida con la siguiente afirmación:

La derogación del requisito de la carta fianza generado por la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado facilitará la interposición del recurso de anulación por parte de los contratistas.

5.4.2 Respecto a la variable dependiente: La garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales.

Mediante esta variable se verificará la validez de la consecuencia o efecto del principal problema, por tanto debemos decir que:

La tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación del laudo arbitral se garantiza permitiendo el uso del mencionado recurso, y asimismo su debido proceso tanto como su efectividad. Evidentemente la incorporación de una carta fianza para su interposición entorpece el acceso a la justicia ordinaria y al mencionado derecho.

Cabe mencionar que el arbitraje es una vía de justicia extraordinaria al que las partes deciden acudir y que por su misma naturaleza es onerosa, sin embargo no pueden tener las mismas características que un proceso ordinario, cuya principal cualidad es el libre acceso de todas las personas que decidan acudir al mismo, la creación por parte del Estado de una condición onerosa es inconstitucional y afecta sobre todo el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva siendo que además esta es una garantía en los procesos. Por tanto se puede afirmar que:

La libre interposición del recurso de anulación del laudo arbitral asegurará el respeto al derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva.

5.5. Contrastación de Hipótesis.

Hipótesis conclusiva:

La derogación del requisito de la carta fianza generado por la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado facilitará la interposición del recurso de anulación por parte de los contratistas; con lo cual se asegurará el respeto al derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva.

HIPOTESIS INICIAL

Si se deroga el requisito de la carta fianza incorporado por la modificación al D.L. N° 1341°; entonces se asegurará la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudo.

HIPOTESIS CONCLUSIVA

La derogación del requisito de la carta fianza generado por la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado facilitará la interposición del recurso de anulación por parte de los contratistas; con lo cual se asegurará el respeto al derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva.

De la contrastación de la hipótesis se puede observar que la hipótesis inicial ha sido comprobada positivamente, puesto que al derogarse el requisito de la carta fianza ya no se generará ningún obstáculo a la interposición del recurso de anulación y así se evitará la vulneración a ciertos derechos fundamentales.

CONCLUSIONES:

PRIMERA:

En razón al desarrollo doctrinario sobre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, se puede concluir que existe una protección constitucional pues es un derecho fundamental de la persona humana, reconocido en nuestra Constitución Política. Tal como está consignado en el inciso 3° del artículo 139 ° de nuestra Carta Magna; del mismo modo en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y en el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDA:

La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso se encuentran relacionadas entre sí; el debido proceso se encarga de observar el debido cumplimiento de las reglas, principios y normas del proceso mientras que la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía de acceso al proceso y de la obtención de una decisión justa y efectiva,

TERCERA

Luego del estudio de la configuración procesal para la anulación de los laudos arbitrales, se puede establecer que la regla civil que otorga el acceso a la nulidad tiene en su estructura límites suficientes para establecer la excepcionalidad y correcta utilización del recurso, por lo mismo que se considera un exceso la creación de un nuevo requisito que restringe el acceso a la justicia el cual se manifiesta con la modificación en el Decreto Legislativo N° 1341°.

CUARTA

Finalmente, al analizar los efectos que produce la incorporación de la carta fianza mediante la modificación en el Art. 45. Inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1341, se puede reconocer una afectación negativa del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva debido a que es únicamente imputable al contratista, transgrediendo su derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, la ley ha de aplicarse a un grupo de sujetos que desean obtener justicia acudiendo ante el Poder Judicial y que los convierte en iguales, por ello no debe hacerse ningún tipo de distinciones, para evitar la afectación de los derechos constitucionales.

QUINTA

Asimismo con la incorporación de este nuevo requisito existe otra afectación negativa para el acceso a la justicia ordinaria según se deslinda de la Constitución Política de nuestro país en su artículo 138° indica que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial; por tanto, cualquier persona que necesita acudir al poder judicial no debe ser condicionada de ninguna manera mucho menos con la creación de requisitos económicos siendo además que otra de las características fundamentales de la justicia ordinaria tal como se desprende del artículo 139° numeral 16° de nuestra Carta Magna es el principio de gratuidad.

RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se recomienda que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en base a la exigencia otorgada por la Ley Orgánica, ha de Velar por el respeto de las atribuciones y garantías dentro de los procesos y con ello favorecer la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, asegurando entre otras cosas el acceso al proceso específicamente respecto a la anulación de laudos arbitrales.

SEGUNDA:

Se sugiere, con el fin de garantizar el libre acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, derogar la incorporación de la carta fianza ubicada en el Art. 45. Inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1341, a fin de evitar la contravención al derecho a la igualdad ante la ley y la característica de gratuidad del proceso judicial contemplado en los artículo 138° y el inciso 16 del artículo 139° de la Constitución Política de nuestro país.

Bibliografía

- Castillo Freyre, M., Sabroso Minaya , R., Castro Zapata , L., & Chipana Catalan , J. (s.f.). LAS CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN LA LEY DE ARBITRAJE DEL PERÚ. *Revista Lumen- UNIFE* (10). Recuperado el 05 de DICIEMBRE de 2018, de http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/lumen_10/lumen_10.html
- Aguiar Lozano, H. F. (2010). *Tratado sobre la teoría del enriquecimiento injustificado o sin causa en el derecho civil de las obligaciones*. Ecuador: Eumed. Obtenido de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/748/Concepto%20Historico%20del%20termino%20accion.htm>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París, Francia.
- Barona Vilar , S. (2006). *Medidas Cautelares en el Arbitraje* . Navarra , España : Editorial Arazandi.
- Caivano Roque, J. (Octubre de 2015). El contrato de arbitraje y su autonomía respecto del contrato que lo contiene. *Revista de Derecho y Ciencias Sociales* (13).
- Calderón Moreyra , G. (2017). El recurso de anulación y el requisito de admisibilidad en la ley de contrataciones. *Revista de Arbitraje Pontificia Universidad Católica del Perú*(07). Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/18065>
- Cantuarias Salaverry , F. (1994). *El Arbitraje en el Perú: Desarrollo Actual y Perspectivas Futuras* . Lima , Perú : Cultura Cuzco S.A Editores .
- Caso Luis Fernando Garrido Pinto contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesados con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 82-2005 (Tribunal Constitucional 14 de noviembre de 2005). Obtenido de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/08123-2005-HC.html>
- Caso: Municipalidad Provincial De Lima Contra Artículos 16.1. Inciso E) , 23.3 Y 28. 1 De La Ley N ° 28165, Exp N° 0015-2005-AI/TC (Tribunal Constitucional Cinco de Enero de 2006).
- Castillo Freyre , M. (2009). *El Arbitraje en la Contratación Pública* (Vol. 7). (M. Castillo Freyre , Ed.) Lima, Perú: Palestra Editores S.A.C.
- Castillo Freyre , M., & Sabroso Minaya , R. (Febrero de 2010). *Legis*. Obtenido de Arbitraje Obligatorio y de Derecho en la Contratación Pública: http://arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_obligatorio_y_de_derecho_en_la_contratacion_publica/arbitraje_obligatorio_y_de_derecho_en_la_contratacion_publica.asp?CodSeccion=1
- Castillo Freyre , M., & Sabroso Minaya , R. (2011). El Arbitraje en el Estado Peruano . *Revista Ius Et Veritas* (43). Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/issue/view/1100>
- Castillo Freyre, M., Sabroso Minaya , R., Castro Zapata , L., & Chipana Catalán , J. (2015). Principios y Derechos de la Función Arbitral . *Revista Lex* , 15, 217-234.
- Castro Torres , C. (2016). *La prohibición del control judicial de la motivación del laudo arbitral que resuelve conflictos de las contrataciones con el estado y su incidencia sobre el Estado constitucional de derecho en el Perú*. Universidad Continental, Lima. Obtenido de

- https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/continental/2936/1/INV_FDE_312_TE_Castro_Torres_2016.pdf
- Chamorro Bernal , F. (1994). *La Tutela Judicial Efectiva*. Barcelona : Bosch.
- Chiriboga Arteta , V. (2012). *La proteccion actual de la acción de nulidad en contra de los laudos arbitrales* . Universidad de San Francisco de Quito , Quito . Obtenido de <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1409/1/104870.pdf>
- Comporti, M. (1980). *Derecho Real en General. Tratado de Derecho Civil y Comercial*. Milan: Giuffre.
- Couture Etcheverry , E. (2010). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil* . Buenos Aires : La Ley.
- Cremades Sanz Pastor , B. (2006). El Arbitraje en la Doctrina Constitucional Española. *Revista Lima* , 199.
- De Oliveira , C. (2009). El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva desde la Perspectiva de los Derechos Fundamentales. *Revista de Derecho*, 185-201.
- Demanda de Amparo , Exp. N° 06356-2006-PA/TC (Tribunal Constitucional Catorce de Abril de 2009).
- Diaz Colchado , J. (2013). *AMPARO Y ARBITRAJE LA SUBSIDIARIEDAD DEL AMPARO Y EL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL*. Lima. Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/125/2014/11/diaz_colchado_juan_amparo_arbitraje.pdf
- Esbrí Montoliú, M. (11 de 06 de 2015). Obtenido de https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/403662/2015_Tesis_Esbri%20Montoliu_MiguelAngel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Eugenio Prieto, B. (1995). *Teoria General del Proceso*. Bogotá: Temis S.A.
- Figuerola Valdés , J. (2014). La Autonomia de los Arbitros y la Intervencion Judicial . *Revista de Arbitraje de la Pontificia Universidad Catolica del Perú* (4). Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/10388/10838>
- Gandolfo Gutierrez , R. (14 de setiembre de 2017). *La bala de la plata*. Obtenido de Revista de derecho de los alumnos de la Universidad de Lima: www.athinarevista.com/single-post/2017/09/14/La-bala-de-plata
- Garcia Perez , A., Del Castillo Galvez , J., Fernandez Figuerola , R., & Araoz Fernandez , M. (28 de Junio de 2008). Decreto Legislativo N° 1071-2008. *Decreto Legislativo que Norma el Abitraje*, 375041-375056. Lima, Lima, Perú. Recuperado el Diciembre de 2018, de <http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01071.pdf>
- Gonzales de Cossio , F. (2008). *Arbitraje* . Ciudad de Mexico , México: Editorial Porrúa.
- Gonzales Pérez , J. (1984). *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional*. Madrid: Civitas.
- Inversiones La Carreta S.A Contra el Juez del Quincuagesimo Octavo Juzgado Civil de Lima, 763-2005 (Tribunal Constitucional 13 de Abril de 2005).
- Isique, M. (19 de Abril de 2018). *Legis.pe*. Recuperado el 04 de Diciembre de 2018, de <https://legis.pe/recurso-anulacion-laudo-arbitral/>
- Jesús , G. (1984). *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva*. España: Civitas.
- Kuczynski Godard , P., Zavala Lombardi , F., & Thorne Vetter, A. (07 de Enero de 2017). Decreto Legislativo N° 1341-2017-EF. *DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO*, 4-

15. Lima , Lima , Perú. Obtenido de <https://busquedas.elperuano.pe/download/full/6Asl6SqC4bGAuHRix4RUyB>
- Kuczynski Godard, P., & Thorne Vetter , A. (19 de Marzo de 2017). Decreto Supremo N° 056-2017-EF. *Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF*, 5-50. Lima , Lima , Peru . Obtenido de https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/251688/226994_file20181218-16260-1daifok.pdf
- Landa Arroyo , C. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia*. Lima : Editora Diskcopy S.A.C.
- Landa Arroyo, C. (2012). *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia* (Vol. Volumen 1). Lima, Perú: Editora Diskcopy S.A.C. Obtenido de http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_constitucional/derecho_debido_proce_jurisp_voll.pdf
- Ledesma Narvaez , M. (2009). *Jurisdicion y Arbitraje* . Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Lohmann Luca Tena, J. (1988). *El Arbitraje. Para Leer elCodigo Civil* (Vol. Volumen V). Lima, Perú : Pontificia Universidad Catolica del Peru .
- Lohmann Luca Tena, J. (s.f.). *El Arbitraje. Para Leer elCodigo Civil* . *Revista Peruana de Arbitraje* .
- Lozano Alvarado , G. (2008). *FACTORES QUE AFECTAN LA EFICACIA DEL DERECHO*. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO-ESCUELA DE POSTGRADO, Trujillo. Obtenido de <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5646/Tesis%20Doctorado%20-%20Nelson%20Lozano%20Alvarado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Macias Orellana , F., & Alfaro Nolasco , S. (2017). *El recurso de nulidad en el proceso arbitral como unico medio de impugnacion idoneo en la ley de mediación,conciliación y arbitraje*. Universidad del Salvador , San Salvador . Obtenido de <http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13305/1/TESIS%20FINAL%21.pdf>
- Mario Luis , R. (2009). *La Anulacion de Laudo Arbitral por Afectacion a la Tutela Jurisdiccional Efectiva*. Lima : Ara Editores EIRL.
- Monroy Gálvez, J. (2007). *Teoria General del Proceso*. Lima: Palestra Editores.
- Obando Blanco , V. (2011). *El Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva*. Lima : ARA Editores .
- Osterling Parodi , F. (26 de Setiembre de 2005). *Osterling Abogados* . Recuperado el 04 de Diciembre de 2018, de <http://www.osterlingfirm.com/miembros.html>
- Pena Trapero, B. (2009). La Medicion del Bienestar Social: una revision critica. *Estudios de Economia Aplicada*, 27-2, 299-324. Obtenido de http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1277311906.medicion_del_bs_revision_critica_bernardo_penatrapero.pdf
- Priori Posada , G. (2003). La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las Situaciones Jurídicas Materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso. *Ius Et Veritas PUCP*(26), 273-292. Obtenido de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/search/search?query_input=revista+ius+et+veritas+N%C2%B0+26&query=revista+ius+et+veritas+N%C2%B0

- +26&authors_input=&authors=&title_input=&title=&abstract_input=&abstract=&galleyFullText_input=&galleyFullText
- Priori Posada , G. (Diciembre de 2014). Del Derecho de Accion a la Efectiva Tutela de los Derechos. *Revista Ius Et Veritas*(49), 146-161. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/13621/14244>
- Priori Posada , G. (2014). Del Derecho De Acción A La Efectiva Tutela De Los Derechos. *Ius Et Veritas*(49), 149-161. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/13621/14244>
- Priori Posada, G. (2003). La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las Situaciones Juridicas Materiales : hacia un necesaria reivindicación de los fines del proceso. *Revista Ius Et Veritas*(26). Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/issue/view/1309>
- Puglianini Guerra , L. (2012). *La relacion partes- árbitro* (Vol. 19). (M. C. Freyre, Ed.) Santiago de Surco , Lima , Perú : Palestra Editores S.A.C.
- Puglianini Guerra, L. (2012). *La relacion partes-árbitro* (Vol. 19). (M. C. Freyre, Ed.) Santiago de Surco , Lima , Perú : Palestra Editores S.A.C.
- Roca Martinez , J. (1992). *Arbitraje e Instituciones Arbitrales* . Barcelona , España: Bosch.
- Romianello, C. (2012). *Teoria General del Proceso* (Tercera ed.). Roma , Italia : StreetLib. Obtenido de [https://books.google.com.pe/books?id=RGQCAwAAQBAJ&pg=PA576&lpg=PA576&dq=Alem%C3%A1n+Adolf+Wach,+en+sus+obras+%22Manual+de+Derecho+Procesal+Civil%22+\(1885\)&source=bl&ots=vV9OTsPX_O&sig=WpiNenDCQjF9gogSCKs0bp2Hd4&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjewufQsJ_eAhUOz1M](https://books.google.com.pe/books?id=RGQCAwAAQBAJ&pg=PA576&lpg=PA576&dq=Alem%C3%A1n+Adolf+Wach,+en+sus+obras+%22Manual+de+Derecho+Procesal+Civil%22+(1885)&source=bl&ots=vV9OTsPX_O&sig=WpiNenDCQjF9gogSCKs0bp2Hd4&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjewufQsJ_eAhUOz1M)
- Rubio Correa , M. (1999). *Estudio de la Constitucion Politica de 1993*. San Miguel, Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Perú.
- Salcedo Flórez, A. (2010). En Torno a la Naturaleza Juridica del Arbitraje. *Revista de Análisis Internacional*(2). Obtenido de file:///C:/Users/RAUL/Downloads/21-Texto%20del%20art%C3%ADculo-81-1-10-20111019.pdf
- Sequeira , B. (2017). Naturaleza Juridica del Arbitraje. *Cuaderno Juridico Y Politico* , 2(7). Obtenido de <http://repositorio.upoli.edu.ni/192/1/495-1973-1-PB.pdf>
- Sumaria Benavente , O. (2009). El Sistema de la Tutela Jurisdiccional: La disputa por la construcción de un modelo procesal en América Latina. *Revista de la Pontifica Universidad Catolica del Perú* , 3(1). Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprosesal/article/view/2085/2019>
- Valencia Miron , A. (2000). *Introduccion al Derecho Procesal* . Granada: Comares.
- Vera Cacho, G. (2013). Consideraciones generales acerca del arbitraje . *Revista Ius Et Praxis* (44). Obtenido de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/viewFile/73/56
- Vidal Ramirez , F. (2003). *Manual de Derecho Arbitral*. Lima, Perú: Gaceta Juridica.

Anexos

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



TESIS

“VULNERACIÓN A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA A TRAVÉS DEL REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LA ANULACIÓN DEL LAUDO EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

- I. La derogación de la incorporación de la carta fianza generada por la modificación a Ley de Contrataciones con el Estado.**
 1. La finalidad de incorporar la carta fianza en la modificación a la Ley de Contrataciones con el Estado, es reducir la cantidad de recursos de anulación de laudos sin justificación jurídica
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.


2. El monto exigido para la aceptación del recurso de anulación de laudos constituye un obstáculo económico para el acceso a la justicia.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
3. La exigencia de la carta fianza constituye una acción de control de la jurisdicción ordinaria sobre la arbitral.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.




II. La garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en los recursos de anulación de laudos arbitrales.

1. La tutela jurisdiccional efectiva surte sus efectos en todos los ámbitos jurisdiccionales, por lo mismo que procura su garantía en todos ellos.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
2. La condición de la presentación de carta fianza, con montos dinerarios excesivos, para interponer un recurso de anulación de laudo arbitral, bloquea el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo

- c. No opina.
-
- 3. La derogación de la exigencia de carta fianza para interponer el recurso de anulación de laudo arbitral permitirá garantizar la tutela jurisdiccional efectiva.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

2. Solicitud presentada al sistema de información judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

 SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA <small>(TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 043-2003-PCM)</small> <small>E-MAIL:</small>		N° DE REGISTRO
I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN Lizeth Maria Artega Muñoz		
II. DATOS DEL SOLICITANTE		
MARCAR CON UN "X" <input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica		TELEFONO / E-mail 958509375
N° RUC (Sólo para Personas Jurídicas)		
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL		
LE/DNI (Persona Natural) 47832009	AV/CALLE/JIRÓN Prol Bolognesi	N°/DPTO 302
DISTRITO Requena		PROVINCIA Chiclayo
DEPARTAMENTO Lambayeque		
III. INFORMACIÓN SOLICITADA		
- Datos estadísticos de expedientes ingresados por recursos de anulación de laudo arbitral.		
- Lista de Expedientes (NPS) por recurso de anulación de laudo.		
IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN		
V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X")		
<input checked="" type="checkbox"/> Copia Simple <input type="checkbox"/> Copia Certificada <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Correo Electrónico		
APELLIDOS Y NOMBRES Amparito		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
FIRMA (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) LE / DNI: 47832009		
FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA		
OBSERVACIONES:		
NOTA: 1. La forma de entrega estará sujeta a la capacidad técnica de la dependencia. 2. En caso de Representante Legal, deberá adjuntar copia simple del Documento que acredita la representación.		
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		N° DE REGISTRO
II. DATOS DEL SOLICITANTE		FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) Calle Yafac Draxta Beralchme		FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN

3. Respuesta del Poder Judicial a la solicitud presentada al Sistema de Información Judicial.

Expedientes Ingresados por Anulación de Laudos Arbitrales de la CSJLA.		
Periodo: Ene 2016 - Dic 2017		
Periodo		Cantidad de Expedientes
2016		20
2017		11
TOTAL		31

Elaboración: Of. Estadística - CSJLA
Fuente: SIJ

2016	2017
Enero 00027-2016-0-1706-JR-CI-04	Febrero 00030-2017-0-1706-SP-CI-02
Marzo 00530-2006-28-1707-JM-CI-01	Marzo 00648-2017-0-1706-JR-CI-05 00648-2017-0-1706-JR-CI-05
Abril 00686-2016-0-1706-JR-CI-03	Mayo 00980-2017-0-1706-JR-CI-01 01001-2017-0-1706-JR-CI-05
Mayo 02209-2007-13-1706-JR-CI-04 02209-2007-13-1706-JR-CI-04 02209-2007-13-1706-JR-CI-04	Agosto 01702-2017-0-1706-JR-CI-03
Junio 01331-2016-0-1706-JR-CI-01 01250-2016-0-1706-JR-CI-04 01219-2016-0-1706-JR-CI-06 01219-2016-0-1706-JR-CI-06 01219-2016-0-1706-JR-CI-06 01250-2016-0-1706-JR-CI-04 01219-2016-0-1706-JR-CI-06 01219-2016-0-1706-JR-CI-06	Septiembre 00111-2017-0-1706-SP-CI-01 00109-2017-0-1706-SP-CI-02 03218-2015-36-1706-JR-CI-06
Julio 01558-2016-0-1706-JR-CI-06	Octubre 00129-2017-0-1706-SP-CI-01 00128-2017-0-1706-SP-CI-02
Agosto 01583-2016-0-1706-JR-CI-02 00078-2016-0-1706-SP-CI-02 00181-2016-0-1706-SP-LA-02 01583-2016-0-1706-JR-CI-02	
Octubre 00111-2016-0-1706-SP-CI-02	